

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/Q/CRI/1,
IP/Q2/CRI/1,
IP/Q3/CRI/1,
IP/Q4/CRI/1

18 de enero de 2002

(02-0261)

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio**

Original: español

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN

COSTA RICA¹

En el presente documento se reproduce la declaración introductoria realizada por la delegación de Costa Rica, las preguntas que le fueron formuladas y las respuestas correspondientes con motivo del examen de la legislación que se llevó a cabo en la reunión del Consejo celebrada los días 18 al 22 de junio de 2001.²

I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA

Costa Rica asigna la mayor importancia a la protección de los derechos de propiedad intelectual establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC y por ello ha realizado los esfuerzos necesarios para lograr que la legislación nacional en la materia asegure el cumplimiento de las obligaciones que el país ha asumido.

Desde mayo de 1998, el Gobierno de Costa Rica definió como una de sus prioridades la reforma integral a la legislación nacional en materia de propiedad intelectual para adecuarla a las obligaciones derivadas de dicho Acuerdo e introducir otras reformas que permitieran a Costa Rica tener una legislación moderna e integral en la materia. Este esfuerzo significó la aprobación de siete leyes nacionales y tres tratados internacionales.

En Costa Rica, la Constitución Política de 1949 reconoce la protección a los derechos de propiedad intelectual mediante su artículo 47, al establecer que "Todo autor, inventor, productor o comerciante, gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley."

Asimismo, Costa Rica ha aprobado gran cantidad de tratados de la OMPI; entre ellos, merece destacarse que el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, es ley de la República desde agosto de 1977; la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión ("Convención de Roma, 1961") es ley en Costa Rica desde marzo de 1971 y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial fue aprobado en marzo de 1995.

¹ Por lo que respecta a las leyes y reglamentos pertinentes a la esfera objeto de examen y notificados por Costa Rica en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se hace referencia a los documentos IP/N/1/CRI/1 y Add.1, IP/N/1/CRI/C/1 a 2, IP/N/1/CRI/E/1 a 3, IP/N/1/CRI/I/1 a 3, IP/N/1/CRI/L/1, IP/N/1/CRI/U/1 e IP/N/6/CRI/1.

² El acta de la reunión se distribuyó en el documento IP/C/M/32.

En este sentido, es importante resaltar que, de conformidad con el artículo 7 de la Constitución Política, los tratados internacionales aprobados por la Asamblea Legislativa tienen desde su entrada en vigor autoridad superior a las leyes nacionales.

En atención al principio de no discriminación, Costa Rica no contempla en su legislación excepciones al principio de trato nacional ni al principio de nación más favorecida. Específicamente, el país no ha presentado ante la OMPI ninguna restricción a la protección de los titulares de creaciones intelectuales en virtud del artículo 6 del Convenio de Berna, ni tampoco en virtud del artículo 16 de la Convención de Roma.

Ahora bien, en relación con las disposiciones legales en las diferentes áreas de la propiedad intelectual, se hará a continuación una exposición en detalle sobre las reformas introducidas en los últimos años en procura de implementar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. En Costa Rica la protección concedida a los derechos de autor y derechos conexos era en términos generales compatible con los estándares multilaterales. Los principales problemas se podían puntualizar en una falta de protección al derecho de arrendamiento o alquiler de las obras y una insuficiente legislación sobre observancia de estos derechos. Para atender estos problemas, el 6 de enero de 2000 se promulgó la Ley N° 7979 que, entre otros cuerpos legales, reformó la Ley de Derechos de Autor y derechos conexos N° 6683 del 14 de octubre de 1982. Asimismo, mediante la Ley N° 7979 de enero de 2000 se reformó la Ley de Derechos de Autor y derechos conexos para ampliar el plazo de protección a estos derechos por 70 años y se incluyeron una serie de normas para proteger las obras en relación con las nuevas tecnologías digitales debido a la aprobación en 1999 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996) y el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) (1996).

En el caso de las marcas y signos distintivos en general -incluidas las denominaciones de origen- el 6 de enero de 2000 se promulgó la Ley N° 7978 mediante la cual se protegen estos derechos; se determinan las normas generales y procedimientos de registro; se regulan las normas sobre marcas notoriamente conocidas; se protegen las denominaciones de origen -incluidas aquellas homónimas- y se establecen las normas referentes al registro de las denominaciones de origen, el derecho de utilización de la denominación y la anulación del registro. Finalmente es importante anotar que en el caso de marcas, éstas se protegen por 10 años, con la posibilidad de ser renovadas indefinidamente por períodos sucesivos de 10 años contados desde la fecha del vencimiento precedente. En el caso de las denominaciones de origen, el registro de éstas tiene una duración indefinida.

Por otra parte, el 6 de enero de 2000, mediante la Ley N° 7979, otra de las leyes que se reforman es la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N° 6867 del 25 de abril de 1983. Las reformas aprobadas en enero de 2000 permitieron incorporar varias modificaciones en materia de dibujos y modelos industriales, con el objeto de implementar las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, especialmente para ampliar los derechos patrimoniales del creador de un dibujo o modelo industrial; proteger los dibujos y modelos industriales nuevos u originales que sean obtenidos independientemente y proteger estas creaciones por un plazo de 10 años.

En relación con el tema de patentes, ésta es quizá el área en que hubo que efectuar los cambios más sustantivos para hacer compatible la legislación existente en ese momento con las normas de la OMC. Anteriormente, no se establecían con claridad las exclusiones de patentabilidad; la protección se restringía solamente a las invenciones producidas en el país; no había suficiente regulación a los derechos del titular; se otorgaba 12 años de protección a las patentes en general y solamente un año a las patentes de medicamentos, productos alimenticios, agroquímicos, entre otros. El 6 de enero de 2000, mediante la Ley N° 7979 se reformó la Ley de Patentes de Invención, que subsana todos los problemas anteriormente apuntados al introducir como principales reformas la

definición de las exclusiones de patentabilidad; la protección de las patentes independientemente del lugar de la invención; el campo de la tecnología o que sea importado el producto; la facultad del titular para otorgar licencias bajo las condiciones exigidas por el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, la fijación de los requisitos para otorgar licencias obligatorias y la protección a todas las patentes por un plazo de 20 años.

En el caso específico sobre obtenciones vegetales, Costa Rica aún no tiene disposiciones especiales en la materia debido a que el país se ha amparado al plazo establecido en el párrafo 4 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, con el objetivo de cumplir con los compromisos asumidos, el poder ejecutivo ya presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre la materia, el cual está en conocimiento de los diputados y los sectores interesados.

En materia de esquemas de trazado, en Costa Rica no existía ninguna disposición que protegiera estos diseños por lo cual se promulgó el 17 de diciembre de 1999 la Ley N° 7961. Esta Ley establece los conceptos técnicos; determina los requisitos de originalidad y los actos lícitos o ilícitos y protege estos esquemas de trazado por 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o de 15 años a partir del último día del año civil en que se diseñó el esquema.

En el caso de la información no divulgada, en Costa Rica solamente existían disposiciones aisladas que protegían este tipo de propiedad, contempladas en algunos artículos del Código Penal, el Código de Trabajo y en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. No obstante ello, estas disposiciones resultaban deficientes y no existía un concepto ni una regulación integral sobre información no divulgada. Por lo anterior, el 18 de enero de 2000 se promulgó la Ley N° 7975 mediante la cual se disponen las normas que determinan el ámbito de protección y la información excluida de la misma; se establecen las condiciones para autorizar el uso a terceros, las formas, adquisición o divulgación sin consentimiento del titular; se reguló la responsabilidad y confidencialidad en las relaciones laborales o comerciales; se protegen los datos suministrados para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos y se protege la información no divulgada por parte de las autoridades administrativas y judiciales en los respectivos procedimientos.

Finalmente, el proceso de reforma integral a la legislación costarricense sobre propiedad intelectual culminó con la aprobación de la Ley de Procedimientos de Observancia a los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 del 12 de octubre de 2000. Mediante esta Ley se unifican en un mismo cuerpo jurídico las obligaciones en la materia derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC para proteger todas las áreas de la propiedad intelectual. La Ley establece, entre otras normas:

- las disposiciones sobre medidas cautelares;
- la facultad a las autoridades judiciales para que ordenen a las autoridades de aduana destruir o eliminar las mercancías infractoras;
- el establecimiento de un Tribunal Registral Administrativo que agotará la vía y conocerá en apelación las decisiones emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial y el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos;
- la remisión al Código Procesal Civil y al Código Procesal Penal según sea el procedimiento a seguir;
- la disposición para que se conozca en vía abreviada los procedimientos civiles de propiedad intelectual, y

- la imposición de penas de cárcel de uno a tres años para delitos cometidos en violación de cada una de las áreas de propiedad intelectual, incluidos delitos para proteger las obras en relación con las nuevas tecnologías digitales para dar cumplimiento efectivo a los derechos derivados de los nuevos tratados de la OMPI.

Pese a los cambios introducidos en el ordenamiento jurídico nacional, el Gobierno de Costa Rica es consciente que el proceso legislativo y educativo debe continuar en procura de la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual. Por lo anterior, el Gobierno ha tenido la iniciativa de presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reformar la Ley N° 8039 con el objetivo de incrementar las penas privativas de libertad para los delitos contra derechos de propiedad intelectual; reformar la acción para los delitos contra derechos de autor para que sea de instancia pública y derogar el artículo 70 de la ley referente al principio de lesividad e insignificancia.

Adicionalmente a esta iniciativa, el Gobierno de Costa Rica a través del Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Justicia y Gracia, ha continuado su esfuerzo en la coordinación de actividades entre los organismos respectivos y la capacitación a funcionarios sobre las leyes para asegurar la efectiva protección de la propiedad intelectual. A nivel interno, el Registro de la Propiedad Industrial y el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos (ambos adscritos al Ministerio de Justicia y Gracia) han llevado a cabo importantes cambios administrativos para aplicar la nueva legislación. En el caso de la observancia de las leyes, el Gobierno continúa coordinando esfuerzos con el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Dirección General de Aduanas, así como con la Escuela Judicial -entidad encargada de la formación a los jueces- para la promoción de las nuevas leyes y la efectiva aplicación de las mismas.

Prácticamente todas las reformas descritas anteriormente, señor Presidente, fueron aprobadas antes de concluir el plazo del 1° de enero de 2000, lo que permitió a Costa Rica cumplir satisfactoriamente con las obligaciones asumidas en materia de propiedad intelectual en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Las nuevas leyes así como las reformas introducidas a la legislación fueron debidamente notificadas en tiempo a la secretaría del Consejo de los ADPIC. Asimismo, Costa Rica remitió con suficiente antelación para que fueran del conocimiento de los distinguidos Miembros de este Consejo, tanto el cuestionario sobre la lista de cuestiones sobre la observancia, como las preguntas que recibimos de Suiza, el Japón, el Canadá, los Estados Unidos y la Unión Europea en las semanas anteriores. Aprovechamos esta ocasión para agradecer a las delegaciones que nos hicieron llegar preguntas ya que nos dieron la oportunidad de tratar con mayor detalle numerosos aspectos de nuestra legislación. Quisiéramos recordarles que todas las respuestas de Costa Rica ya han sido distribuidas y aquellas preguntas que fueron enviadas en los últimos días ya han sido respondidas y están disponibles en la sala.

Los beneficios que ha traído la reforma integral a la legislación sobre propiedad intelectual son de diversa índole; especialmente debe resaltarse que Costa Rica cuenta actualmente con estándares aceptados multilateralmente en materia de protección a estos derechos y que ello ha incidido positivamente en la política general de atracción de inversión extranjera directa que promueve el país, así como mayores incentivos a la investigación y el desarrollo creativo y artístico nacional.

Costa Rica seguirá realizando los esfuerzos hechos hasta la fecha para velar por el cumplimiento efectivo de la legislación sobre propiedad intelectual y reiterar nuestro apego estricto a los compromisos asumidos ante la OMC.

II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL CANADÁ

1. ¿Qué recursos tienen a su alcance los titulares de derechos frente a la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o la piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, como se requiere en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC y en general?

En atención a lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, una de las principales novedades de la Ley sobre Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 del 12 de octubre de 2000, es que establece un listado de figuras penales de tutela a los bienes jurídicos derivados de marcas y signos distintivos, información no divulgada, derechos de autor y derechos conexos, patentes, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad y los esquemas de trazado de los circuitos integrados.

Finalmente, es importante mencionar que la Ley N° 8039 permite el decomiso y destrucción de mercancías dictadas en sentencia penal como productos fraudulentos ya sea a petición de parte o de oficio.

2. ¿Qué protección da a las "obras extranjeras" la legislación sobre derecho de autor de su país?

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley N° 6683 de 14 de octubre de 1982 y sus reformas, las obras de autores extranjeros, domiciliados en el exterior, gozarán en Costa Rica de la protección que les acuerden las convenciones internacionales a que el país se adhiera.

En el caso de Costa Rica, mediante Ley N° 6083 del 29 de agosto de 1977 se aprobó el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas con lo cual el país aplica los criterios para otorgar protección consagrados en el artículo 3 de dicho Convenio, es decir, según la nacionalidad del autor o el lugar de publicación de la obra.

3. Entendemos que se ha sometido a la consideración de la Asamblea Legislativa de Costa Rica el proyecto de legislación sobre protección de las obtenciones vegetales.

a) ¿Para cuándo está prevista la aplicación efectiva de tal legislación?

En el caso de las obtenciones vegetales, es importante señalar que el poder ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre protección a obtenciones vegetales. Este proyecto de ley surge no sólo a raíz de los compromisos adquiridos por nuestro país en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, sino como una clara necesidad de contar con una legislación que respalde los esfuerzos de instituciones públicas y privadas que al día de hoy intervienen en la generación de nuevas variedades a través de programas de mejoramiento genético.

El texto base de discusión fue elaborado con base en la ley tipo del Convenio de la UPOV de 1991. Adicionalmente, conviene mencionar que actualmente se encuentra en la corriente legislativa un proyecto de ley que pretende reformar la Ley de Semillas con el objeto de otorgarle facultades a la Oficina Nacional de Semillas para el registro de las nuevas variedades vegetales.

El proyecto de ley se encuentra en la corriente legislativa y es una Comisión Especial de Propiedad Intelectual, en la cual participan diputados, representantes del poder ejecutivo y otros interesados, que tendrán como tarea analizar y mejorar el texto propuesto. El Gobierno de Costa Rica confía en que el análisis del proyecto de ley continúe en aras de tener un texto de consenso que sea aprobado en la Asamblea Legislativa antes de concluir la presente administración, es decir, para mayo del año 2002.

b) ¿Cuáles son las principales mejoras introducidas por esa legislación en lo que respecta a las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC?

De conformidad con el párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, Costa Rica debe brindar protección a todas las obtenciones vegetales ya sea mediante patentes, un sistema eficaz *sui generis* o una combinación de ambos.

No obstante lo anterior, conforme a lo que establece el párrafo 4 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC, que ampara a un país en desarrollo Miembro que esté obligado a ampliar la protección mediante patentes a sectores de tecnología que no gozaban de tal protección en la fecha general de aplicación de dicho Acuerdo, Costa Rica puede aplazar la aplicación en relación con la protección a obtenciones vegetales por un período adicional de cinco años, es decir hasta el 2005. Lo anterior, claro está, con excepción de la aplicación de los artículos 3, 4 y 5 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En este sentido, el proyecto de ley que envió el poder ejecutivo a la Asamblea Legislativa implementa las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC, tomando en consideración la ley tipo del Convenio de la UPOV, de acuerdo al Acta de 1991.

Entre los aspectos más relevantes de este proyecto de ley pueden mencionarse los siguientes:

- se establece como condiciones para la protección de las variedades vegetales que cumplan con los requisitos de novedad, distinción, homogeneidad, estabilidad y denominación apropiada;
- se determinan las personas que tienen derecho a solicitar la protección;
- se establecen los alcances del derecho del obtentor;
- se otorga un período mínimo de protección de 25 años para árboles y vides y de 20 años para el resto de las plantas;
- se da la posibilidad de otorgar licencias contractuales y licencias obligatorias.

Es importante recalcar que este proyecto de ley aún se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa a cargo de una Comisión Especial de Propiedad Intelectual establecida al efecto, la cual podrá realizar las modificaciones que considere necesarias con el fin de lograr un texto de consenso que cumpla con las obligaciones multilaterales asumidas por el país en la materia.

4. Entendemos que, para octubre de 2001, está previsto que entre en vigor el reglamento de aplicación de la Ley N° 8039, de 12 de octubre de 2000, sobre procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

a) Sírvanse indicar cuál es el estado actual de ese reglamento.

El Gobierno de Costa Rica se complace en hacer de su conocimiento que el Reglamento a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 de 12 de octubre de 2000, ha sido recientemente revisado y aprobado por la Procuraduría General de la República. En virtud de lo anterior, este reglamento será próximamente publicado según los trámites jurídicos necesarios para que entre en vigencia.

b) ¿Cuáles son las principales mejoras introducidas por esa Ley y su reglamento en lo que respecta a las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC?

La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual introduce importantes disposiciones para brindar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual mediante el establecimiento de medidas cautelares, medidas en frontera, procedimientos administrativos y procedimientos civiles y penales, tal y como lo exigen las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC.

Los aspectos más relevantes de estas normas son los siguientes:

- Protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual por medio de una normativa necesaria en relación con medidas cautelares (incluso las aplicadas por las aduanas).
- Aplicabilidad de medidas cautelares por la autoridad administrativa o judicial siempre que quien la pida acredite que es el titular o su representante. La autoridad competente requerirá una garantía suficiente por el solicitante, para proteger al supuesto infractor y evitar abusos.
- Necesidad de otorgar audiencia sobre la aplicación de medidas cautelares, salvo si la misma puede hacer nugatorios sus efectos; sin embargo, cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin audiencia, la autoridad notificará la misma a la parte afectada al menos dentro de tres días hábiles después de la ejecución.
- Determinación para que la parte promovente presente la denuncia administrativa o la demanda judicial en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de la resolución que acoge la medida cautelar.
- Facultad para que el titular solicite a la autoridad administrativa o judicial que ordene a las autoridades de aduanas suspender una importación o exportación al momento de su despacho; sin embargo, se exigirá que acredite que es el titular o representante, que otorgue una garantía y aporte la información y descripción de la mercancía para que las autoridades de aduana puedan identificarla con facilidad.
- Obligación de las autoridades de aduana para que actúen de oficio y suspendan el despacho de mercancías si existe presunción de que infringen un derecho de propiedad intelectual. Las autoridades deberán denunciar al Ministerio Público la comisión del delito dentro de las 24 horas después de la retención de la mercancía.
- Facultad a las autoridades judiciales para que ordenen a las autoridades de aduana destruir o eliminar las mercancías infractoras.
- Protección a los perjudicados en casos de retención infundada de las mercancías.
- Establecimiento de un Tribunal Registral Administrativo que agotará la vía administrativa y conocerá en apelación las decisiones emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial y el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
- Disposición para que se conozca en vía abreviada de los procedimientos civiles de propiedad intelectual.
- Imposición de penas de cárcel para delitos cometidos contra derechos de propiedad intelectual hasta por tres años.

Por otra parte, en cuanto al Reglamento a la Ley N° 8039 -cuyo borrador, tal como se indicó en la respuesta anterior, fue aprobado recientemente por la Procuraduría General de la República- entre las principales disposiciones que contiene cabe citar las siguientes:

- Determinación del contenido que debe tener una solicitud de medida cautelar.
- Disposiciones sobre el procedimiento y ejecución de medidas cautelares y medidas en frontera y sobre la cesación de sus efectos.
- Disposiciones sobre el procedimiento administrativo en materia de información no divulgada.
- Determinación del contenido de la solicitud de sistemas de trazado de los circuitos integrados.
- Facultad para presentar recursos de revocatoria y apelación contra todas las resoluciones emitidas por el Registro de Propiedad Industrial y el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Se ruega explicar si su legislación incluye medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, y para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC. En caso positivo, se ruega explicar si esas medidas se acomodan a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC y tal y como lo permite el párrafo 2 del artículo 27 del mismo Acuerdo, el párrafo 4.a) del artículo 1 de la Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, establece entre las excepciones a la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger la salud, entre otras excepciones.

Hasta la fecha, el Registro de la Propiedad Industrial no ha aplicado esta excepción a ninguna solicitud de registro de patente.

Una de las innovaciones que se introdujeron a la legislación costarricense por medio de la Ley N° 7975, Ley de Información no Divulgada de 4 de enero de 2000, es la regulación en los casos en que se deban presentar datos de prueba u otros no divulgados como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos; dichos datos se protegerán contra todo uso comercial desleal y toda divulgación, según lo dispone el artículo 8 de la Ley N° 7975 antes citada. Debe tomarse en cuenta que dicho artículo establece además que las autoridades competentes podrán utilizar datos de prueba sin divulgar la información protegida, cuando se trate de estudios contemplados en las reglamentaciones sobre registros de medicamentos o agroquímicos para prevenir prácticas que, entre otras condiciones, sean para proteger la salud humana o la salud animal o vegetal, a fin de prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual o el recurso a prácticas que limiten el comercio injustificadamente.

Actualmente, las entidades competentes trabajan en la reglamentación necesaria de dicha legislación. Uno de los aspectos que serán abordados en la reglamentación respectiva es considerar con mayor detalle los alcances del artículo 8 de la citada Ley.

B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

2. Se ruega indicar cómo su legislación estipula la protección de los derechos exclusivos de los autores en relación con sus obras literarias y artísticas, en el sentido del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC que exige a los Miembros que observen los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna y el Apéndice del mismo (1971).

En primera instancia es importante mencionar que en Costa Rica el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas fue aprobado como Ley de la República N° 6083 de 29 de agosto de 1977.

Adicionalmente, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley N° 6683 de 14 de octubre de 1982 y sus reformas, implementa las obligaciones derivadas del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En particular, los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna, excepto el artículo 16, son implementados en la legislación costarricense mediante los artículos 1 a 76 de la Ley N° 6683 antes citada. En el caso del artículo 16 del Convenio de Berna, éste es implementado en la legislación costarricense mediante las disposiciones de los artículos 41 y 71 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 de 12 de octubre de 2000.

3. Sírvanse describir la protección concedida a los autores de programas de ordenador, bases de datos o compilaciones de datos.

El párrafo 2 del artículo 1 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley N° 6683 de 14 de octubre de 1982 y sus reformas, dispone que "Por 'obras literarias y artísticas' deben entenderse todas las producciones en los campos literario y artístico, cualquiera sea la forma de expresión, tales como: ... los programas de cómputo dentro de los cuales se incluyen sus versiones sucesivas y los programas derivados."

Por otra parte, el artículo 8 de la citada Ley N° 6683 protege las bases de datos como compilaciones.

En cuanto al plazo de protección a estos derechos, el artículo 58 de la citada Ley dispone que los derechos de autor son permanentes durante toda su vida. Después del fallecimiento del autor, disfrutarán de ellos, por el término de 70 años, quienes los hayan adquirido legítimamente.

4. Se ruega especificar si su legislación estipula el derecho de arrendamiento y, en caso afirmativo, las obras abarcadas por éste.

El artículo 16 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley N° 6683 de 14 de octubre de 1982 y sus reformas, dispone que al autor de la obra literaria o artística le corresponde el derecho exclusivo de utilizarla.

Entre los derechos exclusivos que tiene el autor, el literal g) del artículo 16 dispone el derecho de distribución y en el literal p) del artículo 4 de la misma Ley N° 6683 se establece el alcance de este derecho, entre otros, el derecho de poner a disposición del público por alquiler el original o las copias de la obra o fonograma.

Por otra parte, el artículo 82 de la citada Ley N° 6683 dispone en su literal c) que los productores de fonogramas o videogramas tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o las copias.

Finalmente, el artículo 86 de la Ley N° 6683 establece que los organismos de radiodifusión gozan, entre otros derechos, del de autorizar o prohibir la distribución al público de sus emisiones de televisión en locales de frecuentación colectiva. El alcance del derecho de distribución está contenido en el literal p) del artículo 4 de la misma Ley.

5. Se ruega describir los derechos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y organismos de radiodifusión en virtud de su legislación.

Los artículos 77 y siguientes de la Ley de Derechos de Autor y derechos conexos, Ley N° 6683 de 14 de octubre de 1982 y sus reformas, establecen disposiciones referentes a la protección de artistas, intérpretes y ejecutantes. Específicamente, el artículo 78 establece que los artistas, intérpretes o ejecutantes, sus mandatarios, herederos, sucesores o cesionarios, a título oneroso o gratuito, tienen el derecho de autorizar o prohibir la fijación, la reproducción, la comunicación al público, la transmisión y retransmisión, por radio o televisión o cualquier otra forma de uso, de sus interpretaciones o ejecuciones.

Por su parte, el artículo 82 de la citada Ley N° 6683 dispone que los productores de fonogramas o videogramas tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

- La reproducción, directa o indirecta, de sus fonogramas o videogramas.
- La primera distribución pública del original y de cada copia del fonograma mediante venta, arrendamiento o cualquier otro medio.
- El arrendamiento comercial al público de los originales o las copias.
- La importación de copias del fonograma, elaboradas sin la autorización del productor.
- La transmisión y retransmisión por radio y televisión.
- La ejecución pública por cualquier medio o forma de utilización.
- La disposición al público de sus fonogramas ya sea por hilo, cable, fibra óptica, ondas radioeléctricas, satélites o cualquier otro medio análogo que posibilite al público el acceso o la comunicación remota de obras protegidas, desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

Por último, el artículo 86 de la Ley N° 6683 establece que los organismos de radiodifusión gozan del derecho de autorizar o prohibir la fijación y reproducción de sus emisiones, la retransmisión, la ulterior distribución y la comunicación, al público, de sus emisiones de televisión en locales de frecuentación colectiva.

6. Sírvanse especificar si su legislación estipula alguna limitación o excepción en relación con cada uno de los derechos descritos anteriormente de conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio de Berna y la Convención de Roma y a la luz del artículo 13 y del párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En primera instancia es importante resaltar que el país no ha presentado ante la OMPI ninguna restricción a la protección de los titulares de creaciones intelectuales en virtud del artículo 6 del Convenio de Berna, ni tampoco en virtud del artículo 16 de la Convención de Roma.

En cuanto a las limitaciones o excepciones establecidas en la legislación costarricense en relación con los derechos de autor y derechos conexos, existen algunas disposiciones al respecto, todas las cuales se encuentran en conformidad con el artículo 13 y el párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En este sentido, los artículos 67 y siguientes de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley N° 6683 de 14 de octubre de 1982 y sus reformas, establecen ciertas excepciones a la protección; entre otras, cabe citar las siguientes:

- las noticias con carácter de prensa informativa;
- los artículos de actualidad, publicados en revistas o periódicos, pueden ser reproducidos, si ello no ha sido expresamente prohibido, debiendo citarse la fuente de origen;
- los discursos pronunciados en las asambleas deliberantes o en reuniones públicas, así como los alegatos ante los tribunales de justicia pueden publicarse en la prensa, radio y televisión periódica, sin necesidad de autorización alguna. Sin embargo, no podrán publicarse en impreso separado o en colección, sin el permiso del autor; y
- la reproducción fotográfica, o por otros procesos pictóricos, de las estatuas, monumentos y otras obras de arte, adquiridos por el poder público, expuestos en las calles, jardines y museos.

7. Les rogamos indiquen la duración de la protección en lo concerniente a cada derecho descrito anteriormente y la obra o materia a las que éste se aplica.

En los artículos comprendidos del 58 al 62 y en el artículo 87 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley N° 6683 de 14 de octubre de 1982 y sus reformas, se estipulan en detalle y con sus particularidades, los plazos de protección a las obras y derechos conexos, que es en general de 70 años.

8. Se ruega describir en qué forma la legislación de su país otorga protección retroactiva de conformidad con el artículo 18 del Convenio de Berna (obligación que tiene su origen en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y el párrafo 6 del artículo 14 del mencionado Acuerdo.

Es importante recordar que en Costa Rica el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas fue aprobado como Ley de la República N° 6083 de 29 de agosto de 1977.

Ahora bien, en relación con la protección retroactiva, el artículo 159 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley N° 6683 de 14 de octubre de 1982 y sus reformas, establece una disposición transitoria en el sentido de que las obras que al entrar en vigencia la ley se encontraran registradas en la Biblioteca Nacional y que pertenezcan al dominio privado, mantendrán los derechos adquiridos, sin tener que llenar ninguna formalidad.

C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

9. Se ruega proporcionar la definición de un signo de conformidad con su legislación nacional y explicar en qué condiciones es objeto de protección.

El artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 de 6 de enero de 2000, define "signo distintivo" como cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial o un emblema.

Asimismo, el mismo artículo define "marca" como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase; "nombre comercial" lo define como un signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento; y "emblema" como un signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un establecimiento.

Por otra parte, los artículos 3 y siguientes de la Ley N° 7978 establecen, entre otras disposiciones, aquéllas referentes a los signos que pueden constituir una marca; las marcas inadmisibles por razones intrínsecas; las marcas inadmisibles por derechos de terceros y el procedimiento para el registro de la marca.

Por su parte, los artículos 64 y siguientes de la citada Ley N° 7978 establecen disposiciones sobre nombres comerciales -los cuales a su vez son aplicables a los emblemas- referentes a la adquisición del derecho; los nombres comerciales (y emblemas) inadmisibles y el procedimiento de registro de estos signos.

10. Se ruega confirmar si los servicios constituyen una materia objeto de protección en la legislación sobre marcas de su país. Agradeceríamos que confirmasen también si puede otorgarse protección a signos tales como los nombres comerciales. Se ruega indicar si puede otorgarse protección a elementos tales como sonidos, perfumes y envases.

El artículo 3 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 de 6 de enero de 2000 señala que las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir bienes o servicios. Adicionalmente, señala que la naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.

Por otra parte, tal como se indicó en la respuesta a la pregunta anterior, la citada Ley N° 7978 protege los nombres comerciales como signos distintivos, específicamente en los artículos 64 a 69.

Finalmente, el Registro de la Propiedad Industrial no registra como signo distintivo los sonidos ni los perfumes; sin embargo, la Ley N° 7978 dispone que las marcas pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

11. Les rogamos expliquen si existen prescripciones de utilización como condición para el registro de una marca de fábrica o de comercio. Agradeceríamos que nos facilitasen la definición de utilización y las condiciones de mantenimiento de un registro a ese respecto.

En cuanto a la definición y condiciones de uso de la marca, ésta se dispone en el artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 de 6 de enero de 2000.

En relación con el requisito de uso de la marca, el artículo 4 de la Ley N° 7978 establece las disposiciones pertinentes y en el artículo 8.c) se establece la prohibición para registrar una marca por mejor derecho de un tercero por razón de su uso.

Por último, en el artículo 39 de la citada Ley N° 7978 se disponen las condiciones de cancelación del registro por falta de uso de la marca.

12. Sírvanse confirmar si la legislación de su país permite o no que el registro de marcas de fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente.

Efectivamente, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 de 6 de enero de 2000, establece en el artículo 20 que la marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de 10 años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.

13. Describan, en caso afirmativo, las prescripciones especiales existentes en la legislación de su país en lo concerniente al uso de una marca de fábrica o de comercio.

Tal y como se mencionó en la respuesta a la pregunta 4 anterior, el artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 de 6 de enero de 2000, dispone las condiciones de uso de las marcas; en relación con el requisito de uso de la marca, el artículo 4 de la Ley N° 7978 establece las disposiciones pertinentes y en el artículo 8.c) se establece la prohibición para registrar una marca por mejor derecho de un tercero por razón de su uso.

Por último, en el artículo 39 de la citada Ley N° 7978 se disponen las condiciones de cancelación del registro por falta de uso de la marca.

D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

14. Se ruega indicar si el organismo encargado del registro de marcas de su país rechaza o no una solicitud de marcas en caso de que ésta contenga una indicación geográfica.

El párrafo 2 del artículo 3 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 de 6 de enero de 2000, señala que sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en la Ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

Adicionalmente, el inciso l) del artículo 7 de la citada Ley dispone que no podrá ser registrado como marca un signo que contenga una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 antes indicado.

15. Les rogamos que proporcionen la definición de indicación geográfica a tenor de la legislación de su país.

El artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 de 6 de enero de 2000, define indicación geográfica como el nombre geográfico de un país, una región o localidad, que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción.

16. Sírvanse describir y explicar las disposiciones de su legislación por las que se establece un vínculo, en caso existente, entre las características de una indicación y su origen geográfico.

Según se indicó en la respuesta a la pregunta anterior, el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 de 6 de enero de 2000, define indicación geográfica como el nombre geográfico de un país, una región o localidad, que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción. Por su parte, el mismo artículo define denominación de origen como la denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

17. Se ruega explicar cómo se otorga protección adicional en la legislación de su país para los vinos y bebidas espirituosas. Sírvanse mencionar otros tipos de productos, en caso de que existan, abarcados por esa protección adicional.

El artículo 71 de la Ley N° 7978 de 6 de enero de 2000, establece que una indicación geográfica (en cuyo caso también se aplicará para los vinos y bebidas espirituosas) no podrá usarse en el comercio por ningún medio relacionado con la designación o presentación de un producto o servicio cuando tal indicación sea falsa o, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, la región o localidad de origen de los productos o servicios, indique o sugiera al público una idea falsa o engañosa del origen de ellos, o cuando el uso pueda inducir al público a confusión o error acerca del origen, la procedencia, las características o cualidades del producto o los servicios.

Asimismo, en el artículo 72 de dicha Ley N° 7978 se establece que no podrá usarse en la publicidad ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos, por no ser originarios del lugar designado por la indicación geográfica, o bien, aun cuando se indique el origen verdadero del producto o servicio pero igualmente genere confusión en el público. Tampoco se permite el empleo en el registro de marcas de expresiones tales como: "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

El artículo 75 y siguientes de la citada Ley N° 7978 permite que en el caso en que se presente un registro de una marca para vinos o bebidas espirituosas que consista en una indicación geográfica, podrá prohibirse o anularse si el producto respectivo no tiene la indicación geográfica con la cual pretenden registrarse.

18. Les rogamos expliquen de qué forma las excepciones del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC son utilizadas en su jurisdicción. Sírvanse proporcionar ejemplos del uso de las excepciones por tribunales o listas de nombres considerados genéricos en su jurisdicción.

El literal c) del artículo 75 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 de 6 de enero de 2000, señala que no podrá registrarse como denominación de origen un signo que sea la denominación común o genérica de algún producto. La denominación se estima común o genérica cuando sea considerada como tal por los conocedores de este tipo de producto y por el público en general.

Puede registrarse una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con este producto; pero la protección no se extenderá al nombre genérico ni a la expresión empleados.

E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

19. Sírvanse explicar si su legislación abarca la protección a los dibujos y modelos guiándose básicamente por consideraciones técnicas o funcionales. Se ruega explicar de qué modo se protegen los dibujos y modelos textiles.

El artículo 25 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983, define dibujo industrial como toda reunión de líneas o de colores, y modelo industrial toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, siempre que esa reunión o esa forma dé una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación.

Adicionalmente, el artículo citado establece que la protección concedida por la Ley no comprende los elementos ni características del dibujo o modelo industrial que sirvan únicamente para obtener un efecto técnico o funcional.

En cuanto a los dibujos y modelos textiles, la legislación costarricense no establece normas especiales para el registro de los dibujos o modelos textiles. Las normas citadas en la pregunta anterior, especialmente el artículo 28 de la Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983 con sus reformas, son las disposiciones aplicables para el registro de los dibujos y modelos textiles por lo cual no se dificulta injustificadamente la protección a este tipo de propiedad intelectual.

20. Sírvanse explicar cómo protege su legislación a los titulares de derechos de un dibujo o modelo frente a la importación de artículos con un dibujo o diseño incorporado o copiado.

El párrafo 4 del artículo 25 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983, establece que el titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho a impedir que, sin su consentimiento, terceros fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia o fundamentalmente una copia del dibujo o modelo protegido.

21. Se ruega indicar si la legislación de su país proporciona o no el derecho a otorgar una licencia obligatoria en lo que respecta a los dibujos y diseños industriales.

El artículo 31 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983, dispone que la primera parte de dicha Ley -referida a las patentes de invención- será aplicable, en lo conducente, a la protección de los dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad.

Por ello, en el caso de la aplicación de licencias obligatorias para dibujos y modelos industriales, se deberá atender a las disposiciones que implementan las obligaciones derivadas del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, a saber los párrafos 1, 5, 6, 7, 9 y 10 del artículo 18, el artículo 19 y el artículo 20 de la Ley N° 6867 anteriormente citada. Asimismo, los artículos 25 y 30 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 de 12 de octubre de 2000.

22. Se ruega indicar durante qué período de tiempo la legislación de su país otorga protección a los dibujos y modelos industriales.

El artículo 30 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983, establece que el registro de un dibujo o modelo industrial tendrá una duración de 10 años.

F. PATENTES

23. Se ruega explicar cómo define la legislación de su país los conceptos de: novedad, invención y aplicación industrial.

El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983, establece en el primer párrafo que una invención es patentable si es nueva, tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.

Para tales efectos, el párrafo 3 de la citada Ley establece que una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable. También quedará comprendido en el estado de la técnica el contenido de otra solicitud de patente en trámite ante el mismo Registro de la Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o, en su caso, la prioridad, sea anterior a la de la solicitud en consideración; pero sólo en la medida en que este contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior cuando sea publicada. El estado de la técnica no comprenderá lo divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud en Costa Rica o, en su caso, dentro del año anterior a la prioridad aplicable, siempre que tal divulgación resulte, directa o indirectamente, de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente o del incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

La divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en procedimiento de concesión de una patente, no quedará comprendida en la excepción antes mencionada, salvo que la solicitud objeto de esa publicación haya sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente o la publicación se haya hecho indebidamente.

Por su parte, el párrafo 5 del artículo 2 de la Ley N° 6867 antes citada establece que se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

Finalmente, la Ley N° 6867 dispone en el párrafo 6 del artículo 2 que se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en la industria, entendida ésta en su más amplio sentido, que abarque, entre otros, la artesanía, la agricultura, la minería, la pesca y los servicios.

24. Sírvanse especificar si en la legislación de su país las patentes o los derechos de patente se otorgan sin ningún tipo de exclusión. En caso de que existan exclusiones, descríbase detalladamente la forma en que éstas se aplican en términos legales y prácticos.

El artículo 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983, reformada por la Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, señala lo que no se considera invenciones así como una serie de excepciones a la patentabilidad.

Para los efectos de la Ley de Patentes, no se considerarán invenciones:

- Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente.
- Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas.
- Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego.
- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las

cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

Por su parte, las excepciones señaladas en la Ley N° 6867 y sus reformas son las siguientes:

- Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente.
- Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.
- Las plantas y los animales.

Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.

25. Sírvanse explicar si su legislación estipula la exclusión de invenciones de la patentabilidad basándose en el orden público o la moralidad. En ese caso, les rogamos expliquen el artículo pertinente de su legislación así como su formulación. Desearíamos también saber si éste se ha aplicado en la práctica.

Tal y como lo permite el párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC y de acuerdo a la respuesta a la pregunta 24, el párrafo 4.a del artículo 1 de la Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, establece entre las excepciones a la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público y la moralidad, entre otras excepciones.

Hasta la fecha, el Registro de la Propiedad Industrial no ha aplicado esta excepción a ninguna solicitud de registro de patente.

26. Les rogamos expliquen si los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos están excluidos de la patentabilidad en su legislación. Si es así, sírvanse explicar la sección pertinente de su legislación así como su formulación.

Tal y como lo permite el párrafo 3 a) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC y de acuerdo a la respuesta a la pregunta 24, el párrafo 4.b del artículo 1 de la Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, establece entre las excepciones a la patentabilidad los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.

27. Sírvanse explicar si las plantas, los animales y esencialmente los procesos biológicos están o no excluidos de la patentabilidad en su legislación. En caso afirmativo, les rogamos aclaren el artículo pertinente de su legislación así como su formulación.

Tal y como lo permite el párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC y de acuerdo a la respuesta a la pregunta 24, el párrafo 4.c) y d) del artículo 1 de la Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, establece entre las excepciones a la patentabilidad las plantas y los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.

28. Les rogamos que describan de qué forma y en virtud de qué disposiciones los microorganismos, los procesos no esencialmente biológicos, los procesos microbiológicos y las obtenciones vegetales están protegidos en su legislación. Sírvanse explicar a este respecto los artículos pertinentes de su legislación.

La legislación costarricense al determinar los criterios sobre lo que no se considera invenciones, así como las exclusiones a la patentabilidad (especificadas en la respuesta a la pregunta 24 anterior) no contempla a los microorganismos, los procedimientos no esencialmente biológicos, ni los procedimientos microbiológicos. En este sentido, en Costa Rica estos productos o procedimientos, en tanto cumplan con las condiciones de patentabilidad establecidos en la Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, podrán ser registradas como invenciones.

En el caso específico sobre obtenciones vegetales, Costa Rica aún no tiene disposiciones especiales en la materia debido a que el país se ha amparado al plazo establecido en el párrafo 4 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante lo anterior, es importante mencionar que el poder ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Protección a Obtenciones Vegetales, el cual está siendo analizado por los diputados y los sectores interesados.

Este proyecto de ley surge no sólo a raíz de los compromisos adquiridos por nuestro país en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, sino como una clara necesidad de contar con una legislación que respalde los esfuerzos de instituciones públicas y privadas que al día de hoy intervienen en la generación de nuevas variedades a través de programas de mejoramiento genético.

El texto base de discusión fue elaborado con base en la ley tipo del Convenio de la UPOV de 1991. Adicionalmente, conviene mencionar que actualmente se encuentra en la corriente legislativa un proyecto de ley que pretende reformar la Ley de Semillas con el objeto de otorgarle facultades a la Oficina Nacional de Semillas para el registro de las nuevas variedades vegetales.

29. Les rogamos que expliquen de qué forma su legislación protege a los titulares de derechos de patentes frente a la importación y frente al ofrecimiento para la venta de una invención patentada.

En el artículo 16 de la Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas se dispone lo relativo a los derechos conferidos por la patente y las limitaciones a éstos. En el párrafo 1 de dicho artículo se dispone que entre los derechos exclusivos que la patente confiere a su titular está el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de oferta para la venta o importación cuando la materia de la patente sea un producto o cuando la materia de la patente sea un procedimiento, en los casos en que se realicen estos fines respecto al menos sobre el producto obtenido directamente mediante dicho procedimiento.

Asimismo, conviene señalar que la legislación costarricense permite las importaciones paralelas bajo los supuestos contemplados en el artículo 16 de la Ley N° 6867 antes citada. En el párrafo segundo de este artículo y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, se dispone que siempre que no atente de manera injustificable contra la explotación normal de la patente, ni cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses de su titular o su licenciataria, los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos de venta, oferta para la venta, uso, usufructo, importación o cualquier modo de comercialización de un producto protegido por la patente, una vez que ha sido puesto en el comercio de cualquier país, con el consentimiento del titular o un licenciataria.

30. Les rogamos indiquen si la legislación de su país estipula la protección mediante patente de productos químicos farmacéuticos y agrícolas. Si su respuesta es afirmativa, sírvanse indicar la referencia jurídica.

El artículo 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, define lo que se entiende por invenciones patentables, entre otras, pueden ser productos. Aunque la Ley costarricense no lo

especifica, sí es posible registrar como patentes los productos farmacéuticos o agroquímicos siempre que cumplan las condiciones de patentabilidad exigidas por la Ley en el artículo 2.

En relación con estos productos, es importante mencionar que la Ley N° 6867 antes citada establece en el párrafo 8 del artículo 6 una disposición sobre la prohibición de fabricación, importación y comercialización si después de la inscripción de una patente, el Ministerio de Salud, para medicamentos, artículos y sustancias de aplicación terapéutica, o el Ministerio de Agricultura y Ganadería para agroquímicos, comprueba que el proceso o el producto no reúne las condiciones originales con las que fue autorizado. Dicha prohibición será a solicitud del Ministerio respectivo y sin responsabilidad para el Estado.

31. Les rogamos aclaren si la protección de patentes de un proceso, según está estipulado en su legislación, abarca el producto obtenido directamente mediante ese proceso.

Tal y como se expuso en la respuesta a la pregunta 29 anterior, en el artículo 16 de la Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas se dispone lo relativo a los derechos conferidos por la patente y las limitaciones a éstos. En el párrafo 1.b) de dicho artículo se disponen los derechos que tiene el titular cuando la materia de la patente sea un procedimiento en los casos en que se realicen determinados fines respecto al menos sobre el producto obtenido directamente mediante dicho procedimiento.

32. Les rogamos que expliquen las condiciones adicionales, si las hay, existentes en su legislación además de la divulgación suficiente de la invención contenida en el artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC (a saber, presentación de justificación en lo que respecta al acceso a material genético o consentimiento previo a su utilización). Si esas condiciones adicionales existen, indíquese la legislación pertinente y describáanse las condiciones adicionales detalladamente.

En el artículo 6.4) de la Ley de Patentes se establecen los requisitos para la presentación de la solicitud en concordancia con lo que establece el artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Para el caso de patentes que involucren elementos de biodiversidad, la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998, dispone en el artículo 63 y siguientes las normas para acceder a los elementos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad *ex situ* e *in situ* y en el artículo 65 la disposición sobre el consentimiento previamente informado. No obstante ello, estas disposiciones aún no han sido reglamentadas por lo cual todavía no son eficaces frente a terceros.

En este sentido, una disposición importante que debe tomarse en consideración es el artículo 68 de la citada Ley de Biodiversidad, el cual establece como norma de interpretación que lo dispuesto en dicha Ley sobre el acceso a los elementos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad no constituirá restricción encubierta ni obstáculo para el comercio. Dicho artículo establece además que cualquier interpretación en sentido contrario será declarada nula por la autoridad administrativa o judicial, según corresponda.

33. Se ruega describir si su legislación estipula excepciones limitadas a los derechos exclusivos concedidos por una patente. Si su respuesta es afirmativa, se ruega mencionar la legislación pertinente.

En el artículo 16 de la Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas se dispone lo relativo a los derechos conferidos por la patente y las limitaciones a éstos. Las excepciones a estos derechos están especificadas en el párrafo 2 de dicho artículo el cual señala que dichas excepciones se aplicarán siempre que no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses de su titular o su licenciataria.

Los derechos que confiere la patente no se extienden a los actos jurídicos de cualquier naturaleza, siempre que sean realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales; los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada y las importaciones paralelas (en los términos explicados en la respuesta a la pregunta 29 anterior), entre otros.

34. Se ruega explicar si la legislación de su país tiene o no previsto el otorgamiento de licencias obligatorias. En caso afirmativo, se ruega explicar exhaustivamente las condiciones en las cuales puede concederse una licencia obligatoria. Especialmente, sírvanse indicar de qué forma su legislación nacional considera los méritos individuales en la autorización de esa utilización.

La Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, contempla la posibilidad de otorgar licencias obligatorias bajo los supuestos exigidos por el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC referente a "Otros usos sin autorización del titular de los derechos".

Las disposiciones que implementan las obligaciones derivadas del citado artículo 31 son los párrafos 1, 5, 6, 7, 9 y 10 del artículo 18, el artículo 19 y el artículo 20 de la Ley N° 6867 anteriormente citada. Asimismo, los artículos 25 y 30 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 de 12 de octubre de 2000.

Específicamente sobre los méritos individuales del solicitante de la licencia obligatoria, según el párrafo 6 del artículo 18 antes citado debe previamente probar que tiene la capacidad suficiente para explotar la invención patentada y que ha intentado obtener la autorización del titular de los derechos, en términos y condiciones comerciales razonables y estos intentos no han surtido efectos dentro del plazo de tres años, contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años, contados a partir de la solicitud de la patente, según sea el plazo más largo.

35. Se ruega explicar de qué forma su legislación asegura explícitamente que un usuario propuesto ha realizado esfuerzos para obtener autorización del titular del derecho en términos y condiciones comerciales razonables y que esos esfuerzos no han logrado los resultados previstos en un período de tiempo razonable. En ese contexto, ¿cómo definen ustedes "período de tiempo razonable"? Sírvanse también explicar de qué forma su legislación garantiza que el uso de una licencia obligatoria será autorizado principalmente en lo que respecta al suministro del mercado interno del Miembro que autoriza ese uso.

En relación con la definición de la Ley costarricense sobre un período razonable de tiempo, el artículo 18 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, establece que la concesión de una patente conlleva la obligación de explotarla en Costa Rica, en forma permanente y estable, de modo que el mercado sea abastecido conveniente y razonablemente dentro del plazo de tres años, contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años, contados a partir de la solicitud de la patente, según sea el plazo más largo. Tampoco podrá interrumpirse la explotación por más de un año.

Asimismo, en relación con la concesión de la patente para abastecer el mercado, el párrafo 3 del citado artículo 18 establece que para estos efectos, se considerarán formas de explotación, entre otras, la producción local y la importación lícita de productos.

36. Se ruega indicar si su legislación otorga protección adicional a las innovaciones una vez transcurrido el período de 20 años otorgado por la patente.

Antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000 que reforma la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983, Costa Rica otorgaba 12 años de protección a las patentes en general y solamente 1 año a las patentes de medicamentos, productos alimenticios, agroquímicos, entre otros.

Una de las reformas más significativas de la Ley N° 7979 es la reforma al artículo 17 de la Ley N° 6867 antes citada, la cual amplía la protección a las patentes por 20 años. En Costa Rica no se otorga una protección adicional a las invenciones luego de la expiración de este plazo.

37. Sírvanse explicar de qué forma su legislación estipula el incremento de la protección mediante patente o solicitudes de patente en trámite al 1° de enero de 1995.

Mediante un transitorio establecido en la Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, la cual reforma la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, se dispuso que cuando el plazo de la patente de invención sea menor a 20 años -según reforma al artículo 17 de la citada Ley de Patentes, N° 6867, de 25 de abril de 1983- y la protección a la materia no haya pasado al dominio público, el titular deberá pedir que se extienda dicho plazo para lo cual deberá presentar su solicitud por escrito al Registro de la Propiedad Industrial antes del vencimiento de la patente en Costa Rica. En lo demás, le serán aplicables las reformas introducidas mediante la Ley N° 7979.

En este sentido, a la fecha, se le ha concedido a nueve solicitudes la extensión del plazo de la patente.

38. Sírvanse explicar de qué forma su legislación prevé la revocación de la carga de la prueba en lo que respecta a las patentes de procesos.

La legislación costarricense contempla el principio de carga de la prueba para patentes de procedimiento de conformidad con la obligación derivada del artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC. La disposición específica que implementa dicha obligación se encuentra en el artículo 39 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 de 12 de octubre de 2000.

G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

39. Se ruega describir cómo protege la legislación de su país las topografías.

En Costa Rica no existía legislación que protegiera los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, por lo cual se promulga una ley especial, la Ley N° 7961 de 17 de diciembre de 1999 denominada "Ley de Protección a los Sistemas de Trazado de los Circuitos Integrados". Esta Ley establece, entre otras, las siguientes disposiciones:

- Se definen los conceptos técnicos necesarios para proteger los esquemas de trazado.
- Se determinan los requisitos de originalidad.
- Se determinan los actos lícitos o ilícitos si se realizan sin la autorización del titular del derecho.
- Se establecen los plazos de protección.

40. Sírvanse explicar qué protección otorga la legislación de su país a los titulares de derechos frente a la importación ilícita, la venta o la distribución para fines comerciales de topografías comprendidos los circuitos integrados o un artículo que incorpore un circuito integrado en el sentido del artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En el artículo 8 de la Ley N° 7961 de 17 de diciembre de 1999, se establecen los derechos exclusivos que se le confieren al titular mediante el registro de un esquema de trazado de circuito integrado. Específicamente, el artículo confiere al titular el derecho de impedir que terceras personas realicen cualquiera de los siguientes actos:

- Reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido, en su totalidad o una de sus partes que cumpla la condición de originalidad.
- Comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir, en cualquier forma, el esquema de trazado protegido, un circuito integrado que incorpore ese esquema o un artículo que contenga tal circuito.

41. Se ruega explicar cómo prevé su legislación la dispensa del artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC como se especifica en el artículo 37 de dicho Acuerdo cuando la persona que realice esos actos no supiera o no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado reproducido ilícitamente.

En el artículo 13 de la Ley N° 7961 de 17 de diciembre de 1999, se establece una norma con el título de "Infractor inocente", mediante la cual no se considerará infracción de los derechos sobre un esquema de trazado registrado, la realización de algún acto referido a los derechos exclusivos del titular respecto de un circuito integrado que incorpore, ilícitamente, un esquema de trazado o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando quien lo realice no sepa ni tenga motivos razonables para saber que el esquema se había reproducido de modo ilícito.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, desde el momento en que esa persona sea informada de la ilicitud del esquema de trazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tenga en existencia o que haya pedido desde antes. Sin embargo, a petición del titular del derecho deberá pagarle una compensación equivalente a la regalía que habría correspondido por una contractual.

42. Se ruega indicar la duración de la protección otorgada por su legislación a las topografías.

En el artículo 7 de la Ley N° 7961 de 17 de diciembre de 1999 se establece la protección a los esquemas de trazado por 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o a partir del último día del año civil en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema de trazados en cualquier lugar del mundo, según sea la fecha más antigua.

Asimismo, el párrafo 2 de dicho artículo establece que la protección de un esquema de trazado registrado caducará, en todo caso, al vencer un plazo de 15 años contado desde el último día del año civil en que se diseñó el esquema.

H. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

43. Sírvanse explicar si su legislación otorga o no un período de tiempo definido para la protección de la información no divulgada. En caso afirmativo, se ruega especificar la duración.

Costa Rica no contaba con legislación especial sobre información no divulgada, por lo cual se promulgó la Ley N° 7975 de 4 de enero de 2000. En dicha Ley no se establece un período determinado para la protección a este tipo de secretos comerciales o industriales. La protección permanece en el tiempo siempre y cuando la información no divulgada cumpla con los requisitos establecidos el artículo 2 de dicha Ley.

44. Sírvanse explicar cómo define su legislación la información no divulgada.

El artículo 2 de la Ley N° 7975 de 4 de enero de 2000 dispone en el párrafo 1 la protección a la información no divulgada, entendida ésta como aquella referente a los secretos comerciales e industriales que guarde, con carácter confidencial, una persona física o jurídica para impedir que información legítimamente bajo su control sea divulgada a terceros, adquirida o utilizada sin su consentimiento por terceros, de manera contraria a los usos comerciales honestos, siempre y cuando dicha información se ajuste a lo siguiente:

- Sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo ni en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas introducidas en los círculos donde normalmente se utiliza este tipo de información.
- Esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas razonables y proporcionales para mantenerla secreta.
- Tenga un valor comercial por su carácter de secreta.

45. Se ruega explicar cómo define su legislación los datos presentados a gobiernos u organismos gubernamentales.

Una de las innovaciones que se introdujeron a la legislación costarricense por medio de la Ley N° 7975, Ley de Información no Divulgada de 4 de enero de 2000, es la regulación en los casos en que se deban presentar datos de prueba u otros no divulgados ante instancias gubernamentales como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos; dichos datos se protegerán contra todo uso comercial desleal y toda divulgación, según lo dispone el artículo 8 de la Ley N° 7975 antes citada.

Actualmente, las entidades competentes trabajan en la reglamentación necesaria de dicha legislación. Uno de los aspectos que serán abordados en la reglamentación respectiva es considerar con mayor detalle los alcances del artículo 8 de la citada Ley.

Por otra parte, es importante resaltar el artículo 9 de la mencionada Ley N° 7975 el cual hace referencia a la protección de la información no divulgada en procesos administrativos o judiciales. En este sentido, el artículo establece que en todo proceso, administrativo o judicial, en que alguna de las partes deba revelar información no divulgada, la autoridad que conozca del asunto deberá adoptar todas las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia.

I. OBSERVANCIA

46. Sírvanse exponer cómo contempla su legislación la actuación eficaz contra la infracción de los derechos de propiedad intelectual.

La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 de 12 de octubre de 2000, introduce importantes disposiciones para brindar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual mediante el establecimiento de medidas cautelares, medidas en frontera, procedimientos administrativos y procedimientos civiles y penales.

Los aspectos más relevantes de estas normas son los siguientes:

- Protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual por medio de una normativa necesaria en relación con medidas cautelares (incluso las aplicadas por las aduanas).
- Aplicabilidad de medidas cautelares por la autoridad administrativa o judicial siempre que quien la pida acredite que es el titular o su representante. La autoridad competente requerirá una garantía suficiente por el solicitante, para proteger al supuesto infractor y evitar abusos.
- Necesidad de otorgar audiencia sobre la aplicación de medidas cautelares, salvo si la misma puede hacer nugatorios sus efectos; sin embargo, cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin audiencia, la autoridad notificará la misma a la parte afectada al menos dentro de tres días hábiles después de la ejecución.
- Determinación para que la parte promovente presente la denuncia administrativa o la demanda judicial en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de la resolución que acoge la medida cautelar.
- Facultad para que el titular solicite a la autoridad administrativa o judicial que ordene a las autoridades de aduanas suspender una importación o exportación al momento de su despacho; sin embargo, se exigirá que acredite que es el titular o representante, que otorgue una garantía y aporte la información y descripción de la mercancía para que las autoridades de aduana puedan identificarla con facilidad.
- Obligación de las autoridades de aduana para que actúen de oficio y suspendan el despacho de mercancías si existe presunción de que infringen un derecho de propiedad intelectual. Las autoridades deberán denunciar al Ministerio Público la comisión del delito dentro de las 24 horas después de la retención de la mercancía.
- Facultad a las autoridades judiciales para que ordenen a las autoridades de aduana destruir o eliminar las mercancías infractoras.
- Protección a los perjudicados en casos de retención infundada de las mercancías.
- Establecimiento de un Tribunal Registral Administrativo que agotará la vía administrativa y conocerá en apelación las decisiones emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial y el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
- Disposición para que se conozca en vía abreviada de los procedimientos civiles de propiedad intelectual.
- Imposición de penas de cárcel para delitos cometidos contra derechos de propiedad intelectual.

47. Sírvanse explicar si su legislación contempla o no un mecanismo para recurrir contra decisiones administrativas finales ante órganos judiciales.

La Constitución Política prevé en el artículo 49 una jurisdicción contenciosa-administrativa del poder judicial con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.

En este sentido, una vez que el Reglamento a la Ley sobre Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 de 12 de octubre de 2000, esté vigente y entre en funcionamiento el Tribunal Registral Administrativo, será en la vía contenciosa-administrativa donde se conocerán en alzada las resoluciones emitidas por dicho Tribunal. Las disposiciones específicas para este procedimiento están contenidas en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley N° 3367 de 12 de marzo de 1966 y sus reformas.

Debe recordarse que ante la necesidad de fortalecer los procedimientos administrativos para casos de propiedad intelectual y evitar acudir a la vía judicial, la Ley N° 8039 dispuso en el artículo 19 y siguientes la creación del Tribunal Registral Administrativo que agotará la vía administrativa ante eventuales recursos presentados contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial y el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, entre otros registros adscritos al Registro Nacional.

48. Sírvanse describir cómo autoriza su legislación a que los jueces ordenen la presentación de pruebas por la parte contraria. Se ruega faciliten información precisa acerca de las medidas que se adoptan para garantizar la protección de la información confidencial.

Según el Código Procesal Civil y la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, las autoridades judiciales pueden ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control. Inclusive, el artículo 39 de la Ley de Procedimientos de Observancia establece que "Dentro del proceso abreviado o en los casos de competencia desleal, dentro del proceso sumario, cuando una parte haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones y ésta se encuentre bajo el control de la parte contraria, el juez estará facultado para ordenarle que la aporte."

Respecto a la información no divulgada (secretos comerciales o industriales), la Ley N° 8039 sobre Procedimientos de Observancia establece en el artículo 39 que de solicitarse pruebas bajo el control de la parte contraria, las mismas serán presentadas a condición de que se garantice la protección a este tipo de información.

Asimismo, la Ley de Información no Divulgada, Ley N° 7975 de 4 de enero de 2000, establece en el artículo 9 que "En todo proceso, administrativo o judicial, en que alguna de las partes deba revelar información no divulgada, la autoridad que conozca del asunto deberá adoptar todas las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia. Ninguna de las partes en el proceso podrá revelar ni usar dicha información."

49. Sírvanse citar las disposiciones de su legislación que autorizan a los jueces a ordenar a un demandado que desista de una infracción.

En el artículo 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se establece entre las medidas cautelares que pueden ordenar las autoridades competentes, el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción.

50. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el pago al titular del derecho del resarcimiento adecuado de daños para compensarle por el perjuicio sufrido.

Según el artículo 221 del Código Procesal Civil, en las sentencias, cuando decidan definitivamente las cuestiones debatidas mediante pronunciamiento sobre la pretensión formulada en la demanda y, los autos con carácter de sentencia, cuando decidan sobre excepciones o pretensiones incidentales que pongan término al proceso, se condenará al vencido al pago de las costas personales y procesales en las cuales se incluyen los gastos de honorarios.

Por otra parte, en los artículos 8 y 9 de la Ley N° 8039 sobre Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual se dispone para el caso de medidas cautelares que si una medida fue solicitada antes de incoar el proceso y la demanda no se presenta en un mes después de la notificación de la resolución que la acoge, o bien, si la medida cautelar es revocada o por cualquier otra causa se deja sin efecto, quien pretenda tener derecho al resarcimiento por los daños y perjuicios causados con su ejecución, deberá solicitarlo dentro del plazo de un mes a quien conozca del proceso de base. De no solicitarlo en el período señalado o si no se acredita el derecho se ordenará devolver al actor la caución por daños y perjuicios.

51. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el pago de los gastos al titular del derecho por parte del infractor.

Tal y como se mencionó en la respuesta a la pregunta anterior, según el artículo 221 del Código Procesal Civil, en las sentencias, cuando decidan definitivamente las cuestiones debatidas mediante pronunciamiento sobre la pretensión formulada en la demanda y, los autos con carácter de sentencia, cuando decidan sobre excepciones o pretensiones incidentales que pongan término al proceso, se condenará al vencido al pago de las costas personales y procesales en las cuales se incluyen los gastos de honorarios.

52. Sírvanse explicar si los jueces tienen, y de qué modo, la competencia de ordenar que las mercancías infractoras se aparten de los circuitos comerciales o sean destruidas.

El artículo 17 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 de 12 de octubre de 2000, establece una disposición sobre destrucción y comiso de las mercancías. Al respecto, dicho artículo dispone que al emitir la autoridad judicial una resolución que autorice destruir mercancías, deberá considerar los intereses de terceros, así como la proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y la medida ordenada. En la resolución firme de la autoridad judicial, podrá disponerse que las autoridades de aduana destruyan o eliminen las mercancías falsificadas o ilegales.

Las autoridades de aduana no permitirán que las mercancías falsificadas o ilegales se reexporten en el mismo estado ni las someterán a ningún procedimiento aduanero distinto, hasta que la autoridad judicial competente se pronuncie sobre el destino o la destrucción de tales mercancías.

Asimismo, los artículos 41 y 71 de la Ley N° 8039 de 12 de octubre de 2000 disponen, respectivamente en materia civil y en materia penal, que a petición de parte o de oficio, la autoridad judicial podrá ordenar, interlocutoriamente o en la sentencia condenatoria, el decomiso de las mercancías falsificadas o ilegales. En el caso de la destrucción de las mercancías se podrá dictar en sentencia condenatoria.

53. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a indemnizar a un demandado en caso de abuso por parte del demandante.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley N° 8039 de 12 de octubre de 2000, al ordenar una medida cautelar, la autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos requerirá que quien solicite la medida otorgue garantía suficiente antes de que ésta se dicte para proteger al supuesto infractor y evitar abusos.

Asimismo, el artículo 9 de la citada Ley N° 8039 dispone que si la demanda judicial no se presenta en tiempo, o bien, si la medida cautelar es revocada o por cualquier otra causa se deja sin efecto, quien pretenda tener derecho al resarcimiento por los daños y perjuicios causados con su ejecución, deberá solicitarlo, dentro del plazo de un mes, a quien conozca del proceso de base. De no solicitarlo en el período señalado o si no se acredita el derecho, se ordenará devolver al actor la caución por daños y perjuicios.

En procedimiento civil, según el artículo 227 del Código Procesal Civil, cuando se haya ordenado un embargo preventivo, de no presentarse la demanda en el plazo otorgado al efecto, o desechada definitivamente por sentencia firme, se levantará el embargo y se condenará al actor a pagar los daños y perjuicios causados. Asimismo, mediante las disposiciones del Código Penal es posible acusar a un sujeto por denuncia calumniosa y, ya sea en el proceso penal o en proceso civil, presentar una acción civil resarcitoria para el cobro de daños y perjuicios.

54. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La Sección I, Capítulo II de la Ley N° 8039 de 12 de octubre de 2000, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, dispone las normas relativas a las medidas cautelares. Algunas de las disposiciones más relevantes son las siguientes:

- Aplicabilidad de las medidas cautelares por la autoridad administrativa o judicial siempre que quien la pida acredite que es el titular o su representante. La autoridad competente requerirá una garantía suficiente por el solicitante para proteger al supuesto infractor y evitar abusos.
- Remisión al Código Procesal Civil y al Código de Procedimientos Penales para la aplicación de las medidas cautelares, sin embargo se citan como medidas que pueden solicitarse, entre otras, la cesación de los actos que constituyen infracción; el embargo; la suspensión del despacho de mercancías y la caución.
- Necesidad de otorgar audiencia sobre la aplicación de medidas cautelares, salvo si la misma puede hacer nugatorios sus efectos; sin embargo, cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin audiencia, la autoridad notificará la misma a la parte afectada al menos dentro de tres días hábiles después de la ejecución.
- Determinación para que la parte promovente presente la denuncia administrativa o la demanda judicial en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de la resolución que acoge la medida cautelar.

55. Sírvanse exponer las autoridades competentes en su jurisdicción que reciben de los titulares de derechos peticiones de solicitud de que se suspenda el despacho por las autoridades aduaneras de mercancías falsificadas.

El artículo 10 de la Ley N° 8039 de 12 de octubre de 2000 faculta al titular para que solicite a la autoridad administrativa (Director del Registro de la Propiedad Industrial o al Director del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos) o judicial que ordene a las autoridades de aduanas suspender una importación o exportación de mercancía falsificada al momento de su despacho; sin embargo, se exigirá que acredite que es el titular o representante, que otorgue una garantía y aporte la información y descripción de la mercancía para que las autoridades de aduana puedan identificarla con facilidad.

56. Sírvanse indicar si existen o no procedimientos para suspender la exportación de mercancías falsificadas.

Los artículos 10 y siguientes de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 de 12 de octubre de 2000, establecen las disposiciones referentes a medidas en frontera. Estas disposiciones se aplican a todos los derechos de propiedad intelectual.

Entre las disposiciones de la Ley N° 8039 anteriormente citada que merecen destacarse sobre la aplicación de medidas en frontera, figuran las siguientes:

- Facultad para que el titular solicite a la autoridad administrativa (Director del Registro de la Propiedad Industrial o al Director del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos) o judicial que ordene a las autoridades de aduanas suspender una importación o exportación al momento de su despacho; sin embargo, se exigirá que acredite que es el titular o representante, que otorgue una garantía y aporte la información y descripción de la mercancía para que las autoridades de aduana puedan identificarla con facilidad.
- Obligación de las autoridades de aduana para que actúen de oficio y suspendan el despacho de mercancías si existe presunción de que infringen un derecho de propiedad intelectual. Las autoridades deberán denunciar al Ministerio Público la comisión del delito dentro de las 24 horas después de la retención de la mercancía.
- Deber de las autoridades de aduana de informar el nombre y la dirección del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad y descripción de las mercancías objeto de la suspensión siempre que haya sido comprobada una infracción por el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, y a solicitud del titular del derecho.
- Posibilidad de actuación de oficio por parte de las autoridades aduaneras para la suspensión del despacho de mercancías.
- Facultad a las autoridades judiciales para que ordenen a las autoridades de aduana destruir o eliminar las mercancías infractoras.
- Protección a los perjudicados en casos de retención infundada de las mercancías.

57. Sírvanse indicar qué disposiciones de su legislación autorizan a las autoridades competentes a ordenar la destrucción o eliminación de mercancías infractoras.

Tal y como se mencionó en la respuesta a la pregunta 52 anterior, los artículos 41 y 71 de la Ley N° 8039 de 12 de octubre de 2000 disponen, respectivamente en materia civil y en materia penal, que a petición de parte o de oficio, la autoridad judicial podrá ordenar, interlocutoriamente o en la sentencia condenatoria, el decomiso de las mercancías falsificadas o ilegales. En el caso de la destrucción de las mercancías se podrá dictar en sentencia condenatoria.

58. Sírvanse indicar si su legislación contempla o no una excepción para las importaciones de minimis.

En el artículo 12 de la Ley N° 8039 de 12 de octubre de 2000, se disponen los casos en que no se aplican las medidas en frontera. Sobre el particular, la Ley determina que no habrá obligación de aplicar las medidas en frontera a las importaciones lícitas y a las cantidades de mercancías que constituyan parte del equipaje personal del pasajero.

59. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En atención a lo dispuesto en el artículo 61 de Acuerdo sobre los ADPIC, una de las principales novedades de la Ley sobre Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad

Intelectual, Ley N° 8039 de 12 de octubre de 2000, es que establece en el artículo 44 y siguientes, una serie de figuras penales de tutela a los bienes jurídicos derivados de marcas y signos distintivos, información no divulgada, derechos de autor y derechos conexos, patentes, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad y los esquemas de trazado de los circuitos integrados. Todos estos delitos son sancionados con pena de prisión de uno a tres años.

No obstante lo anterior, el Gobierno de Costa Rica está consciente de que la promulgación de la Ley de Observancia N° 8039 es sólo el inicio de un proceso legislativo y educacional en procura de la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual. Por lo anterior, el Gobierno ha tenido la iniciativa de presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reformar la Ley N° 8039 que pretende el incremento de las penas privativas de libertad para los delitos contra derechos de propiedad intelectual hasta cuatro años; reformar la acción para los delitos contra derechos de autor para que sea de instancia pública y la derogación del artículo 70 de la Ley referente al principio de lesividad e insignificancia.

IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Sírvanse describir, en relación con cada una de las formas de propiedad intelectual comprendidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la protección de las obtenciones vegetales, de qué modo se aplica el trato nacional y el trato de la nación más favorecida a los nacionales de los otros Miembros de la OMC, y citar las disposiciones de la legislación pertinentes.

Bajo el principio de no discriminación, Costa Rica no contempla en su legislación ninguna excepción al principio de trato nacional o al principio de nación más favorecida. Más específicamente, es importante resaltar que el país no ha presentado ante la OMPI ninguna restricción a la protección de los titulares de creaciones intelectuales en virtud del artículo 6 del Convenio de Berna, ni tampoco en virtud del artículo 16 de la Convención de Roma.

En el caso específico sobre obtenciones vegetales, Costa Rica aún no tiene disposiciones especiales en la materia debido a que el país se ha amparado al plazo establecido en el párrafo 4 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante lo anterior, es importante mencionar que el poder ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Protección a Obtenciones Vegetales, el cual está siendo analizado por los diputados y los sectores interesados.

B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

2. Sírvanse explicar si la legislación sobre derechos de autor de Costa Rica cumple y en qué forma cumple lo dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula que los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971), excepto el artículo 6bis, ya que ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto del referido artículo en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.

En primera instancia es importante mencionar que en Costa Rica el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas fue aprobado como Ley de la República N° 6083 del 29 de agosto de 1977.

Adicionalmente, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley N° 6683 del 14 de octubre de 1982 y sus reformas, implementa las obligaciones derivadas del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC además de la protección a los derechos morales contenidos en el artículo 6bis del Convenio de Berna.

En particular, los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna, excepto el artículo 16, son implementados en la legislación costarricense mediante los artículos 1 a 76 de la Ley N° 6683 antes citada. En el caso del artículo 16 del Convenio de Berna este es implementado en la legislación costarricense mediante las disposiciones de los artículos 41 y 71 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 del 12 de octubre de 2000.

3. Sírvanse explicar cómo la legislación sobre derecho de autor de Costa Rica protege los programas de ordenador como obras literarias y las compilaciones de datos, tal como requiere el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC y citar las disposiciones legales pertinentes.

El párrafo 2 del artículo 1 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley N° 6683 del 14 de octubre de 1982 y sus reformas, dispone que "Por 'obras literarias y artísticas' deben entenderse todas las producciones en los campos literario y artístico, cualquiera sea la forma de expresión, tales como: ...los programas de cómputo dentro de los cuales se incluyen sus versiones sucesivas y los programas derivados."

Por otra parte, el artículo 8 de la citada Ley N° 6683 protege las bases de datos como compilaciones.

4. El artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que se conferirán derechos de arrendamiento respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas. Sírvanse citar la disposición correspondiente de la legislación sobre derecho de autor de Costa Rica.

El artículo 16 de la Ley de Derechos de Autor y derechos conexos, Ley N° 6683 del 14 de octubre de 1982 y sus reformas, dispone que al autor de la obra literaria o artística le corresponde el derecho exclusivo de utilizarla.

Entre los derechos exclusivos que tiene el autor, el literal g) del artículo 16 dispone el derecho de distribución y en el literal p) del artículo 4 de la misma Ley N° 6683 se establece el alcance de este derecho, a saber, el derecho de poner a disposición del público por venta, alquiler, importación, préstamo o por cualquier otra forma similar, el original o las copias de la obra o fonograma.

5. Sírvanse indicar la duración y las condiciones de protección que se prevén en la legislación sobre derecho de autor de Costa Rica para una obra que no sea fotográfica o de arte aplicado y citar la disposición jurídica pertinente.

El párrafo 2 del artículo 1 de la Ley de Derechos de Autor y derechos conexos, Ley N° 6683 del 14 de octubre de 1982 y sus reformas, reconoce como obras literarias y artísticas a las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía. Asimismo, reconoce como obras aquellas de artes aplicadas tales como ilustraciones, mapas, planos, croquis y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias.

Por lo anterior, los autores son los titulares de los derechos patrimoniales y morales sobre este tipo de obras literarias o artísticas.

6. Sírvanse describir la protección que otorga la legislación sobre derecho de autor de Costa Rica a los artistas intérpretes o ejecutantes y el plazo de la protección.

Los artículos 77 y siguientes de la Ley de Derechos de Autor y derechos conexos, Ley N° 6683 del 14 de octubre de 1982 y sus reformas, establecen disposiciones referentes a la protección de artistas, intérpretes y ejecutantes. Específicamente, el artículo 78 establece que los artistas, intérpretes o ejecutantes, sus mandatarios, herederos, sucesores o cesionarios, a título oneroso o

gratuito, tienen el derecho de autorizar o prohibir la fijación, la reproducción, la comunicación al público, la transmisión y retransmisión, por radio o televisión o cualquier otra forma de uso, de sus interpretaciones o ejecuciones.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 87 de la citada Ley N° 6683, la duración de la protección concedida a los derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes será de 70 años, contados a partir del 31 de diciembre del año en que se realizó la interpretación o ejecución.

7. El párrafo 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas. El referido párrafo dispone que los productores de fonogramas tienen el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus fonogramas. Sírvanse describir cómo la legislación sobre derecho de autor de Costa Rica da cumplimiento a esas obligaciones e indicar el plazo de protección.

Los artículos 81 y siguientes de la Ley de Derechos de Autor y derechos conexos, Ley N° 6683 del 14 de octubre de 1982 y sus reformas, regulan la protección a los productores de fonogramas.

Por medio de la Ley N° 7979 del 6 de enero de 2000 se reformó el artículo 82 de la Ley N° 6683 con el propósito de establecer, entre otros derechos, que los productores de fonogramas tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas y el arrendamiento comercial al público de los originales o las copias.

Asimismo, tal y como se mencionó anteriormente, el artículo 87 de la Ley N° 6683 dispone que la duración de la protección concedida a los productores de fonogramas será de 70 años contados a partir del 31 de diciembre del año en que se realizó la fijación.

C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

8. Sírvanse describir lo que puede constituir materia objeto de marcas de fábrica o de comercio en virtud de la legislación de Costa Rica.

El artículo 3 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, se refiere a los signos que pueden constituir una marca. Esta norma señala que las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios, especialmente las palabras o los conjuntos de palabras (incluidos los nombres de personas), las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier otro distintivo. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Asimismo, el artículo 3 de la citada Ley N° 7978 señala que la naturaleza del producto o servicio, al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.

9. Sírvanse explicar la forma en que Costa Rica protege las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas y las marcas de servicios, y citar las disposiciones legales pertinentes.

Una de las principales innovaciones de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, fue la protección en la legislación costarricense a las marcas notoriamente conocidas de bienes o servicios.

Por medio del artículo *6bis* del Convenio de París, Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995 y, más específicamente, en el artículo 44 de la citada Ley N° 7978, en Costa Rica se reconoce al titular de una marca notoriamente conocida el derecho de evitar que un tercero que carezca de derecho se aproveche indebidamente de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor comercial o publicitario. Asimismo, este artículo dispone que los artículos contenidos en el Título II de la Ley N° 7978 sobre las disposiciones generales sobre las marcas (a saber, entre otras, el registro; la duración, renovación y modificación y los derechos, obligaciones y limitaciones del registro de las marcas) se aplicarán también para las marcas notoriamente conocidas de bienes o servicios.

Finalmente, el artículo 45 de la mencionada Ley N° 7978 establece una lista enunciativa de criterios para demostrar la notoriedad de la marca.

D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

10. Sírvanse describir, en detalle, cómo regula la legislación de Costa Rica el reconocimiento y la protección de las indicaciones geográficas previstas en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, citar las disposiciones pertinentes de las leyes y los reglamentos y dar ejemplos de indicaciones geográficas así protegidas.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, define las indicaciones geográficas como el nombre geográfico de un país, una región o localidad, que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción.

Por medio del artículo 71 y siguientes de dicha Ley, no se permite usar una indicación geográfica en el comercio por ningún medio relacionado con la designación o presentación de un producto o servicio cuando tal indicación sea falsa o indique o sugiera al público una idea falsa o engañosa de su origen, o cuando el uso pueda inducir al público a confusión o error acerca del origen, procedencia, características o cualidades del producto o los servicios.

Las indicaciones geográficas tampoco podrán utilizarse en forma tal que constituyan un acto de competencia desleal.

Adicionalmente, la Ley N° 7978 prohíbe la utilización en la publicidad y en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios de una indicación susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos por no ser originarios del lugar designado por la indicación geográfica, o bien, aun cuando se indique el origen del producto o servicio pero igualmente genere confusión en el público. La Ley N° 7978 también prohíbe en el registro de marcas el empleo de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

En relación con el procedimiento y las condiciones de registro de las denominaciones de origen es necesario indicar que en el artículo 75 y siguientes de la Ley N° 7978 se establecen las disposiciones especiales más importantes, entre ellas: la prohibición, solicitud, procedimiento, duración, modificación y anulación de registro.

A la fecha, se han inscrito seis denominaciones de origen y se encuentran varias solicitudes de registro, especialmente relativas a café, banano, queso y madera.

11. Sírvanse describir, en detalle, la forma en que se aplica el nivel superior de protección requerido para vinos y bebidas espirituosas en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, citar las disposiciones pertinentes de las leyes y los reglamentos y dar ejemplos de indicaciones geográficas para dichos productos.

El artículo 71 de la Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, establece que una indicación geográfica (en cuyo caso también aplicará para los vinos y bebidas espirituosas) no podrá usarse en el comercio por ningún medio relacionado con la designación o presentación de un producto o servicio cuando tal indicación sea falsa o, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, la región o localidad de origen de los productos o servicios, indique o sugiera al público una idea falsa o engañosa del origen de ellos, o cuando el uso pueda inducir al público a confusión o error acerca del origen, la procedencia, las características o cualidades del producto o los servicios.

Asimismo, tal y como se señaló anteriormente, en el artículo 72 de dicha Ley N° 7978 se establece que no podrá usarse en la publicidad ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos, por no ser originarios del lugar designado por la indicación geográfica, o bien, aun cuando se indique el origen verdadero del producto o servicio pero igualmente genere confusión en el público. Tampoco se permite el empleo en el registro de marcas de expresiones tales como: "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

El artículo 75 y siguientes de la citada Ley N° 7978 permite que en el caso en que se presente un registro de una marca para vinos o bebidas espirituosas que consista en una indicación geográfica, podrá prohibirse o anularse si el producto respectivo no tiene la indicación geográfica con la cual pretenden registrarse.

A la fecha, en Costa Rica solamente se ha registrado una denominación de origen relativa a una bebida espirituosa y no hay presentada ninguna otra solicitud para este tipo de productos.

E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

12. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir para obtener la protección de los dibujos y modelos industriales, citar las disposiciones de la legislación de Costa Rica y describir la naturaleza de la protección acordada.

La protección de los diseños industriales está regulada mediante Ley N° 6867 del 25 de abril de 1983, Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y sus reformas.

El artículo 25 y siguientes de la citada Ley N° 6867 disponen las normas sobre los dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad. El párrafo 1 del artículo 26 de dicha Ley establece que serán protegidos los dibujos y modelos industriales nuevos y originales obtenidos independientemente. Asimismo, el párrafo 2 del artículo 25 de la misma Ley dispone que la protección concedida no comprende los elementos ni las características del dibujo o modelo industrial que sirvan únicamente para obtener un efecto técnico o funcional.

El párrafo 4 del artículo 25 de la Ley N° 6867 dispone que el titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá derecho a impedir que, sin su consentimiento, terceros fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia o fundamentalmente una copia del dibujo o modelo protegido.

Por otra parte, la Ley N° 6867 dispone en el artículo 28 los requisitos para presentar la solicitud de registro de un dibujo, modelo industrial o modelo de utilidad ante el Registro de la Propiedad Industrial.

Finalmente, el artículo 30 de la Ley N° 6867, mediante reforma incorporada por la Ley N° 7979 del 6 de enero de 2000, establece un período de protección al registro del dibujo o modelo industrial por 10 años.

13. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir para obtener la protección de los dibujos y modelos textiles, y citar las disposiciones pertinentes de las leyes o reglamentos.

La legislación costarricense no establece normas especiales para el registro de los dibujos o modelos textiles. Las normas citadas en la pregunta anterior, especialmente el artículo 28 de la Ley N° 6867 del 25 de abril de 1983 con sus reformas, son las disposiciones aplicables para el registro de los dibujos y modelos textiles por lo cual no se dificulta injustificadamente la protección a este tipo de propiedad intelectual.

F. PATENTES

14. Sírvanse describir, en detalle, la forma en que la legislación de patentes de Costa Rica aplica el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, indicar cualesquiera excepciones a la patentabilidad previstas e incluir detalles sobre la protección de los microorganismos y los procedimientos no biológicos y microbiológicos y las obtenciones vegetales. Sírvanse citar las disposiciones pertinentes de la ley.

El artículo 1 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983, reformada por la Ley N° 7979 del 6 de enero de 2000, define lo que se entiende por invenciones patentables, entre otras, pueden ser productos o procedimientos. El párrafo 1 del artículo 2 de la misma Ley establece que una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial. Asimismo, el párrafo 7 de este mismo artículo 2 establece que serán invenciones patentables aquellas que cumplan los requisitos dispuestos en la Ley, sin discriminación por lugar de la invención, campo de tecnología o porque los productos sean importados o producidos en el país.

Por otra parte, el artículo 1 de la Ley N° 6867 previamente citada señala lo que no se considera invenciones así como una serie de excepciones a la patentabilidad.

Para los efectos de la Ley de Patentes, no se considerarán invenciones:

- Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente.
- Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas.
- Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego.

La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

Las excepciones señaladas en la Ley N° 6867 y sus reformas son las siguientes:

- Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente.
- Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.

- Las plantas y los animales.
- Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.

En el caso de las obtenciones vegetales, es importante señalar que el poder ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre protección a obtenciones vegetales. Este proyecto de ley surge no sólo a raíz de los compromisos adquiridos por nuestro país en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, sino como una clara necesidad de contar con una legislación que respalde los esfuerzos de instituciones públicas y privadas que al día de hoy intervienen en la generación de nuevas variedades a través de programas de mejoramiento genético.

El texto base de discusión fue elaborado con base en la ley tipo del Convenio de la UPOV de 1991. Adicionalmente, conviene mencionar que actualmente se encuentra en la corriente legislativa un proyecto de ley que pretende reformar la Ley de Semillas con el objeto de otorgarle facultades a la Oficina Nacional de Semillas para el registro de las nuevas variedades vegetales.

15. Sírvanse describir, en detalle, los derechos conferidos a los titulares de patentes con arreglo a la legislación de patentes de Costa Rica y citar las disposiciones pertinentes de la ley.

Según el párrafo 1 del artículo 16 de la Ley N° 6867 del 25 de abril de 1983, la patente conferirá al titular el derecho a explotar, en forma exclusiva, la invención y conceder licencias a terceros para la explotación. Asimismo, la patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación, para estos fines, del producto objeto de la patente.

Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de al menos el producto obtenido directamente mediante dicho procedimiento.

16. Sírvanse describir, en detalle, las disposiciones de la legislación de Costa Rica que permitan el uso no autorizado de una patente, citar las disposiciones pertinentes de la ley, y describir, en detalle, las condiciones en que ese uso pueda ocurrir.

La Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, contempla la posibilidad de otorgar licencias obligatorias bajo los supuestos exigidos por el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC referente a "Otros usos sin autorización del titular de los derechos".

Las disposiciones que implementan las obligaciones derivadas del citado artículo 31 son los párrafos 1, 5, 6, 7, 9 y 10 del artículo 18, el artículo 19 y el artículo 20 de la Ley N° 6867 anteriormente citada. Asimismo, los artículos 25 y 30 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 del 12 de octubre de 2000.

17. ¿Qué plazo de protección para las patentes prevé la legislación de patentes de Costa Rica? Sírvanse describir las disposiciones contempladas para prorrogar el plazo de protección y citar las normas pertinentes de la ley.

Antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 7979 del 6 de enero de 2000 que reforma la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, Ley N° 6867 del 25 de abril de 1983, Costa Rica otorgaba 12 años de protección a las patentes en general y solamente 1 año a las patentes de medicamentos, productos alimenticios, agroquímicos, entre otros.

Una de las reformas más significativas de la Ley N° 7979 es la reforma al artículo 17 de la Ley N° 6867 antes citada, la cual amplía la protección a las patentes por 20 años.

18. Sírvanse describir, en detalle, en qué forma ha prorrogado Costa Rica el plazo de protección requerido por el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC para patentes que existían y estaban protegidas en Costa Rica el 1° de enero de 2000, y citar las disposiciones legales pertinentes.

Mediante un transitorio establecido en la Ley N° 7979 del 6 de enero de 2000, la cual reforma la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, se dispuso que cuando el plazo de la patente de invención sea menor a 20 años -según reforma al artículo 17 de la citada Ley de Patentes, N° 6867, de 25 de abril de 1983- y la protección a la materia no haya pasado al dominio público, el titular deberá pedir que se extienda dicho plazo para lo cual deberá presentar su solicitud por escrito al Registro de la Propiedad Industrial antes del vencimiento de la patente en Costa Rica. En lo demás, le serán aplicables las reformas introducidas mediante la Ley N° 7979.

En este sentido, a la fecha, se le ha concedido a nueve solicitudes la extensión del plazo de la patente.

G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

19. Sírvanse describir, en detalle, la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados prevista en la legislación de Costa Rica, incluido el plazo de protección, y citar las disposiciones pertinentes de la ley.

En Costa Rica no existía legislación que protegiera los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, por lo cual se promulga una ley especial, la Ley N° 7961 del 17 de diciembre de 1999 denominada "Ley de Protección a los sistemas de trazado de los circuitos integrados". Esta Ley establece, entre otras, las siguientes disposiciones:

- Se definen los conceptos técnicos necesarios para proteger los esquemas de trazado.
- Se determinan los requisitos de originalidad.
- Se determinan los actos lícitos o ilícitos si se realizan sin la autorización del titular del derecho.

Se protegen estos esquemas de trazado por 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o de 15 años a partir del último día del año civil en que se diseñó el esquema.

H. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

20. Sírvanse describir, en detalle, cómo regula la legislación de Costa Rica la protección de la información no divulgada como requiere el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC y citar las disposiciones pertinentes de la ley.

Costa Rica no contaba con legislación especial sobre Información no divulgada, por lo cual se promulgó la Ley N° 7975 del 4 de enero de 2000. En el artículo 2 de esta Ley se determina el ámbito

de protección que implementa las obligaciones derivadas del párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

21. Sírvanse describir, en detalle, cómo protege la legislación de Costa Rica los datos de prueba relativos a productos farmacéuticos y químicos agrícolas presentados al Gobierno a fin de aprobar la comercialización de esos productos en Costa Rica y citar las disposiciones pertinentes de la ley.

Una de las innovaciones que se introdujeron a la legislación costarricense por medio de la Ley N° 7975, Ley de Información no Divulgada del 4 de enero de 2000, es la regulación en los casos en que se deban presentar datos de prueba u otros no divulgados como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos; dichos datos se protegerán contra todo uso comercial desleal y toda divulgación, según lo dispone el artículo 8 de la Ley N° 7975 antes citada.

Actualmente, las entidades competentes trabajan en la reglamentación necesaria de dicha legislación. Uno de los aspectos que serán abordados en la reglamentación respectiva es considerar con mayor detalle los alcances del artículo 8 de la citada Ley.

22. ¿Están los solicitantes posteriores que traten de obtener la aprobación de la comercialización de sus propias versiones de productos farmacéuticos y químicos agrícolas aprobados con anterioridad facultados para apoyarse en datos presentados por el solicitante anterior? En caso afirmativo, ¿qué plazo de exclusividad se otorga al solicitante anterior antes de permitir a terceros que se apoyen en sus datos?

Los medicamentos humanos los registra el Ministerio de Salud, mientras que los medicamentos veterinarios y agroquímicos los registra el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

En el caso en que se decida importar o comercializar patentes sobre medicamentos o agroquímicos, debe haber un registro previo ante el respectivo Ministerio. Para ello, se solicitan una serie de requisitos, entre ellos, las fórmulas (cuali-cuantitativas), sin embargo los funcionarios tienen prohibición para poder revelar dichas fórmulas durante el período en que se protege la patente, es decir, 20 años. La anterior prohibición deviene de las disposiciones de la Ley sobre Información no Divulgada, Ley N° 7975 del 4 de enero de 2000.

Tanto para la importación como para la comercialización de los productos, la información brindada por el primer registrante no es pública. En el caso en que un segundo registrante quiera comercializar o importar el producto deberá solicitar al Ministerio que verifique que las respectivas formulaciones son idénticas, no obstante en ningún caso los particulares tienen acceso a la información.

I. OBSERVANCIA

23. Sírvanse describir, en detalle, de qué modo la legislación de Costa Rica prescribe medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual como dispone el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 del 12 de octubre de 2000, introduce importantes disposiciones para brindar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual mediante el establecimiento de medidas cautelares, medidas en frontera, procedimientos administrativos y procedimientos civiles y penales.

La Ley N° 8039 antes citada contempla los recursos ágiles para prevenir las infracciones

cometidas contra los derechos de propiedad intelectual y disuadir nuevas infracciones, tal y como lo dispone el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

24. El párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los jueces estarán facultados para ordenar que se aporten las pruebas necesarias para sustanciar las alegaciones de una parte cuando ésta no haya podido obtener esas pruebas porque se encuentran bajo el control de la parte contraria. Sírvanse describir cómo las leyes o reglamentos de Costa Rica otorgan esa facultad, y citar las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes.

El artículo 39 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 del 12 de octubre de 2000 dispone que "dentro del proceso abreviado o en los casos de competencia desleal, dentro del proceso sumario, cuando una parte haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones y ésta se encuentre bajo el control de la parte contraria, el juez estará facultado para ordenarle que la aporte. Si procede, esta prueba será presentada a condición de que se garantice la protección de la información no divulgada".

25. Sírvanse describir, en detalle, todos los recursos civiles de que disponen los titulares de derechos en el contexto de la legislación de Costa Rica, y citar las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes.

La sección I, capítulo IV de la Ley N° 8039 sobre Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual establece las normas relativas a los procesos civiles. La Ley N° 8039 remite al Código Procesal Civil para la aplicación de las medidas cautelares y el procedimiento establecido en vía abreviada.

En relación con lo anterior, es importante indicar que el artículo 420 del Código Procesal Civil fue reformado mediante la Ley N° 7979 del 6 de enero de 2000 para permitir que los asuntos sobre propiedad intelectual sean conocidos en vía abreviada -el cual es un procedimiento mucho más expedito que el ordinario-. No obstante ello, los casos de competencia desleal en materia de marcas se tramitarán en vía sumaria (que es un proceso aún más ejecutivo) según lo dispone el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472, la cual remite al artículo 432 del Código Procesal Civil.

Otras disposiciones importantes que consagra la sección I del capítulo IV de la Ley N° 8039 se refieren a la determinación de los daños y perjuicios y la autorización para el decomiso y destrucción de mercancías en sentencia civil.

26. Sírvanse describir, en detalle, los procedimientos y recursos provisionales al alcance de los titulares de derechos en conformidad con la legislación de Costa Rica, citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes e indicar cualquier condición en virtud de la cual el titular del derecho podrá valerse de esos procedimientos y recursos.

La sección I, capítulo II de la Ley N° 8039 del 12 de octubre de 2000, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, dispone las normas relativas a las medidas cautelares. Algunas de las disposiciones más relevantes son las siguientes:

- Aplicabilidad de las medidas cautelares por la autoridad administrativa o judicial siempre que quien la pida acredite que es el titular o su representante. La autoridad competente requerirá una garantía suficiente por el solicitante para proteger al supuesto infractor y evitar abusos.

- Remisión al Código Procesal Civil y al Código de Procedimientos Penales para la aplicación de las medidas cautelares, sin embargo se citan como medidas que pueden solicitarse, entre otras, la cesación de los actos que constituyen infracción; el embargo; la suspensión del despacho de mercancías y la caución.
- Necesidad de otorgar audiencia sobre la aplicación de medidas cautelares, salvo si la misma puede hacer nugatorios sus efectos; sin embargo, cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin audiencia, la autoridad notificará la misma a la parte afectada al menos dentro de tres días hábiles después de la ejecución.

Determinación para que la parte promovente presente la denuncia administrativa o la demanda judicial en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de la resolución que acoge la medida cautelar.

J. PRESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA

27. Sírvanse describir, en detalle, los procedimientos contemplados en la legislación de Costa Rica que establezcan prescripciones en frontera para reprimir, al menos, la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor, identificar la autoridad competente y citar las disposiciones pertinentes de la ley o el reglamento.

Los artículos 10 y siguientes de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 del 12 de octubre de 2000, establecen las disposiciones referentes a medidas en frontera. Estas disposiciones se aplican a todos los derechos de propiedad intelectual.

Entre las disposiciones de la Ley N° 8039 anteriormente citada que merecen destacarse sobre la aplicación de medidas en frontera, figuran las siguientes:

- Facultad para que el titular solicite a la autoridad administrativa (Director del Registro de la Propiedad Industrial o al Director del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos) o judicial que ordene a las autoridades de aduanas suspender una importación o exportación al momento de su despacho; sin embargo, se exigirá que acredite que es el titular o representante, que otorgue una garantía y aporte la información y descripción de la mercancía para que las autoridades de aduana puedan identificarla con facilidad.
- Obligación de las autoridades de aduana para que actúen de oficio y suspendan el despacho de mercancías si existe presunción de que infringen un derecho de propiedad intelectual. Las autoridades deberán denunciar al Ministerio Público la comisión del delito dentro de las 24 horas después de la retención de la mercancía.
- Deber de las autoridades de aduana de informar el nombre y la dirección del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad y descripción de las mercancías objeto de la suspensión siempre que haya sido comprobada una infracción por el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, y a solicitud del titular del derecho.
- Posibilidad de actuación de oficio por parte de las autoridades aduaneras para la suspensión del despacho de mercancías.
- Facultad a las autoridades judiciales para que ordenen a las autoridades de aduana destruir o eliminar las mercancías infractoras.

Protección a los perjudicados en casos de retención infundada de las mercancías.

28. Sírvanse indicar si los titulares de otras formas de propiedad intelectual pueden recurrir a medidas de observancia en frontera y, en caso afirmativo, sírvanse describir los procedimientos y recursos con que cuentan en relación con cada una de las formas de propiedad intelectual, y citar las disposiciones pertinentes de la ley.

Tal como se indicó en la respuesta anterior, las disposiciones contenidas en los artículos 10 y siguientes de la Ley N° 8039 del 12 de octubre de 2000 son aplicables a todas las formas de propiedad intelectual y no exclusivamente a las mercancías de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías piratas que lesionan el derecho de autor.

29. El artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC determina los procedimientos que se han de seguir cuando las autoridades competentes puedan actuar de oficio. Sírvanse explicar si las autoridades competentes de Costa Rica están facultadas para actuar de oficio y, en caso afirmativo, sírvanse identificar las esferas de la propiedad intelectual sujetas a las medidas de oficio.

Tal y como se indicó en las respuestas anteriores, una de las particularidades de la Ley N° 8039 del 12 de octubre de 2000 sobre Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, es que sus disposiciones abarcan todos los tipos de propiedad intelectual.

En el caso específico sobre la obligación de actuación de oficio por parte de las autoridades aduaneras, el artículo 16 de la citada Ley N° 8039 lo permite en casos en que éstas tengan suficientes motivos para considerar que se vulnera un derecho de propiedad intelectual en cuyo caso deberán actuar de oficio y retener el despacho de las mercancías, sea porque aluden directamente a tales motivos, o bien, porque pueden generar confusión en el público consumidor. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la retención de las mercancías, las autoridades de aduana deberán denunciar, ante el Ministerio Público, la comisión de alguno de los delitos contemplados en la presente Ley. De lo contrario, la mercancía deberá ser devuelta y la autoridad aduanera será responsable en los términos que establece la Ley General de la Administración Pública – ya sea en los casos de responsabilidad de la Administración por conducta ilícita o lícita del funcionario público.

K. PROCEDIMIENTOS PENALES

30. Sírvanse describir, en detalle, cómo aplican las leyes de Costa Rica el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que prescribe que los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales, que comprenderán penas de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias, al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de infracción de derechos de propiedad intelectual a escala comercial. Sírvanse citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

En atención a lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, una de las principales novedades de la Ley sobre Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 del 12 de octubre de 2000, es que establece en el artículo 44 y siguientes, una serie de figuras penales de tutela a los bienes jurídicos derivados de marcas y signos distintivos, información no divulgada, derechos de autor y derechos conexos, patentes, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad y los esquemas de trazado de los circuitos integrados. Todos estos delitos son sancionados con pena de prisión de uno a tres años.

No obstante lo anterior, el Gobierno de Costa Rica está consciente que la promulgación de la Ley de Observancia N° 8039 es sólo el inicio de un proceso legislativo y educacional en procura de la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual. Por lo anterior, el Gobierno ha tenido la iniciativa de presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reformar la Ley N° 8039

que pretende el incremento de las penas privativas de libertad para los delitos contra derechos de propiedad intelectual hasta cuatro años; reformar la acción para los delitos contra derechos de autor para que sea de instancia pública y la derogación del artículo 70 de la ley referente al principio de lesividad e insignificancia.

31. El artículo 61 estipula que, cuando proceda, entre los recursos disponibles figurarán también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Sírvanse describir las disposiciones de la legislación de Costa Rica que prevén tales recursos, señalar las circunstancias en que éstos se aplicarían, y citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

El artículo 71 de la Ley N° 8039 del 12 de octubre de 2000 dispone que a petición de parte o de oficio, la autoridad judicial podrá ordenar, interlocutoriamente o en la sentencia penal condenatoria, el decomiso de las mercancías falsificadas o ilegales. En el caso de la destrucción de las mercancías se podrá dictar en sentencia penal condenatoria.

32. Asimismo, el artículo 61 indica que los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en casos de infracción dolosa de otras formas de propiedad intelectual. Sírvanse describir las disposiciones de la legislación de Costa Rica que establezcan esos procedimientos y recursos, y citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

Tal y como se indicó anteriormente, en el caso de Costa Rica la Ley sobre Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 del 12 de octubre de 2000, establece en el artículo 44 y siguientes, un listado de figuras penales de tutela a los bienes jurídicos derivados de todas las áreas de propiedad intelectual reconocidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y protegidas por la legislación nacional, es decir, marcas y signos distintivos, información no divulgada, derechos de autor y derechos conexos, patentes, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad y los esquemas de trazado de los circuitos integrados. Todos estos delitos son sancionados con pena de prisión.

L. PREGUNTAS ESTADÍSTICAS

33. Sírvanse proporcionar información estadística referente a derechos civiles de autor, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados y la observancia de secretos comerciales correspondiente al año 2000, incluyendo el número de casos presentados; los mandamientos expedidos; las mercancías infractoras confiscadas; los equipos infractores confiscados; los casos resueltos (incluidos los arreglos); y el importe de los perjuicios indemnizados.

Tomando en consideración que la vigencia de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, es bastante reciente -octubre de 2000-, el poder judicial no cuenta a la fecha con estadísticas oficiales sobre las demandas presentadas en materia civil y específicamente sobre casos de propiedad intelectual presentados en vía abreviada.

No obstante lo anterior, en Costa Rica la práctica ha demostrado que los titulares de derechos de propiedad intelectual optan preferentemente por la vía penal y en ésta presentar acciones civiles resarcitorias o proceder a algún tipo de arreglo entre las partes interesadas mediante conciliación.

34. Sírvanse proporcionar información estadística referente a la observancia penal en la esfera de la piratería lesiva del derecho de autor y la infracción de marcas de fábrica o de comercio correspondiente al año 2000, incluyendo el número de operativos, procesos, condenas, el importe de las multas y/o penas de prisión (con inclusión de las multas pagadas y de las penas

de prisión realmente cumplidas o suspendidas) y cualquier otra información que establezca que el sistema penal funciona eficazmente para disuadir la piratería lesiva del derecho de autor y la falsificación de marcas de fábrica o de comercio.

Antes de la entrada en vigor de la Ley N° 8039 del 12 de octubre de 2000, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, los casos en materia penal generalmente correspondían a denuncias por violación a derechos de autor y derechos conexos (piratería de software en las modalidades de usuario final y distribuidor; copia, reproducción, venta, distribución y depósito de fonogramas, películas y composiciones musicales). Para estos casos hubo intervención judicial (órdenes de allanamiento, registro y secuestro de mercadería falsificada) todos con resultados positivos. Desde que entró en vigor la Ley de Observancia y solamente en San José, se han recibido 63 denuncias sobre delitos de derechos de autor, marcas y otras áreas de la propiedad intelectual. A estas denuncias se les ha seguido el debido trámite.³

Tal y como se mencionó anteriormente, pese a que la vigencia de la citada Ley N° 8039 es bastante reciente -octubre de 2000- se han tenido experiencias exitosas en la aplicación de la misma, especialmente por la aplicación de medidas no solamente en derechos de autor y derechos conexos -como había sido en los años anteriores- sino también en otras áreas de la propiedad intelectual. La aplicación de medidas cautelares contra la falsificación de marcas ha tenido experiencias exitosas, especialmente mediante la ejecución de embargos preventivos practicados en los últimos meses.

Otro ejemplo de la aplicación efectiva de esta Ley es la utilización por parte de los titulares de derechos de propiedad intelectual de los medios administrativos de medidas cautelares. En el caso del Registro de la Propiedad Industrial, la Dirección ha practicado alrededor de ocho decomisos con resultados exitosos.

V. RESPUESTA A LA PREGUNTA FORMULADA POR EL JAPÓN

A. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Sírvanse explicar cuáles son las excepciones o exenciones al trato nacional y al trato de la nación más favorecida que habría en la legislación sobre derecho de autor y derechos conexos, tal como lo admiten los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Costa Rica no contempla en su Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley N° 6683 del 14 de octubre de 1982 y sus reformas, ninguna excepción al principio de trato nacional o al principio de nación más favorecida.

En este sentido, Costa Rica no ha notificado ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ninguna restricción a la protección de los autores en virtud del artículo 6 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, ni tampoco ninguna reserva en virtud del artículo 16 de la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

VI. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR SUIZA

A. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

1. Sírvanse indicar de forma detallada cómo su legislación provee protección para las indicaciones geográficas.

³ Información brindada por la Oficina de la Fiscalía de Delitos Varios.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, define las indicaciones geográficas como el nombre geográfico de un país, una región o localidad, que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción.

Esta Ley no permite usar una indicación geográfica en el comercio por ningún medio relacionado con la designación o presentación de un producto o servicio cuando tal indicación sea falsa o indique o sugiera al público una idea falsa o engañosa de su origen, o cuando el uso pueda inducir al público a confusión o error acerca del origen, procedencia, características o cualidades del producto o los servicios.

Las indicaciones geográficas tampoco podrán utilizarse en forma tal que constituyan un acto de competencia desleal.

Adicionalmente, la Ley prohíbe la utilización en la publicidad y en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios de una indicación susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos por no ser originarios del lugar designado por la indicación geográfica, o bien, aun cuando se indique el origen del producto o servicio pero igualmente genere confusión en el público. La Ley N° 7978 también prohíbe en el registro de marcas el empleo de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

En relación con el procedimiento y las condiciones de registro de las denominaciones de origen es necesario indicar que en el artículo 75 y siguientes de la Ley N° 7978 se establecen las disposiciones especiales más importantes, entre ellas: prohibición, solicitud, procedimiento, duración, modificación y anulación de registro.

B. PATENTES

2. ¿Concede su legislación protección a todos los productos protegidos como patentes o existen excepciones? Si este es el caso, favor de explicar con detalle qué tipo de excepciones existen y cómo cumplen con el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El artículo 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983, reformada por la Ley N° 7979 del 6 de enero de 2000, define lo que se entiende por invenciones patentables, entre otras, pueden ser productos o procedimientos entre los cuales se consideran como invenciones los productos farmacéuticos.

Asimismo, el artículo 1 de la Ley N° 6867 previamente citada señala lo que no se considera invenciones así como una serie de excepciones a la patentabilidad.

Para los efectos de la Ley de Patentes, no se considerarán invenciones:

- Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente.
- Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas.
- Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego.
- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una

combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

Las excepciones señaladas en la Ley N° 6867 y sus reformas son las siguientes:

- Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente.
- Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.
- Las plantas y los animales.
- Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.

3. ¿Considera su legislación, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 27 en el contexto del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, que la importación es una forma de "explotación de una patente" (y excluye por tanto el otorgamiento de una licencia obligatoria, si se importa un producto)?

En cumplimiento de la obligación derivada del párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, el párrafo 7 del artículo 2 de la Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, establece que serán invenciones patentables todos los productos o procedimientos que cumplan los requisitos de patentabilidad dispuestos en dicha Ley, sin discriminación por lugar de la invención, campo de tecnología o porque los productos sean importados o producidos en el país.

Asimismo, en el artículo 18 de la Ley citada se establecen las disposiciones sobre falta o insuficiencia de explotación industrial las cuales son compatibles con el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. En este artículo se dispone que la concesión de una patente conlleva la obligación de explotarla en Costa Rica, en forma permanente y estable, de modo que el mercado sea abastecido conveniente y razonablemente dentro del plazo de tres años, contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años, contados a partir de la solicitud de la patente, según sea el plazo más largo. Tampoco podrá interrumpirse la explotación por más de un año. Para efectos de lo anterior, se considerarán formas de explotación, entre otras, la producción local y la importación lícita de productos.

4. ¿Están las licencias obligatorias sujetas en su legislación a todas las condiciones enumeradas en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC? Sírvanse indicar las disposiciones correspondientes de la Ley.

La Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, contempla la posibilidad de otorgar licencias obligatorias bajo los supuestos exigidos por el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Las disposiciones que implementan las obligaciones derivadas del citado artículo 31 son los párrafos 1, 5, 6, 7, 9 y 10 del artículo 18 y los párrafos a) y b) del artículo 19 de la Ley N° 6867 anteriormente citada. Asimismo, los artículos 25 y 30 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 del 12 de octubre de 2000.

5. ¿Prevé su legislación el principio de la inversión de la carga de prueba en los litigios relativos a patentes de procedimientos? Sírvanse indicar las disposiciones correspondientes de la Ley.

La legislación costarricense contempla el principio de carga de la prueba para patentes de procedimiento de conformidad con la obligación derivada del artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC. La disposición específica que implementa dicha obligación se encuentra en el artículo 39 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 del 12 de octubre de 2000.

C. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

6. Sírvanse indicar de forma detallada si su legislación garantiza que los datos de pruebas u otros no divulgados presentados por un solicitante al organismo oficial competente en el marco del procedimiento prescrito para autorizar la comercialización de un producto farmacéutico o de un producto químico para la agricultura quedan protegidos contra toda divulgación y contra todo uso comercial desleal por un competidor, por ejemplo mediante la prohibición impuesta a un segundo solicitante de fundarse en los datos originales del primer solicitante o de remitirse a ellos en el marco de su posterior solicitud de autorización de comercialización de su propio producto. ¿Establece su legislación excepciones a tal respecto? De ser así, ¿con sujeción a qué condiciones resultarían éstas aplicables? ¿Establece su legislación un plazo específico de protección de esos datos de pruebas u otros no divulgados del primer solicitante?

Antes de la entrada en vigencia de la Ley de Información No Divulgada, Ley N° 7975 del 4 de enero de 2000, Costa Rica no contaba con ningún tipo de legislación en la materia.

Entre otras disposiciones de la Ley N° 7975 se regula que cuando se deban presentar datos de prueba u otros no divulgados como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos, dichos datos se protegerán contra todo uso comercial desleal y toda divulgación, salvo cuando el uso de tales datos se requiera para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección contra todo uso comercial desleal.

Actualmente, las entidades competentes trabajan en la reglamentación necesaria de dicha legislación. Uno de los aspectos que serán abordados en la reglamentación respectiva es considerar con mayor detalle los alcances de lo que podrán considerarse prácticas que limitan injustificadamente el comercio.

Pese a que se está en este proceso de reglamentación, es necesario indicar que lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 7975 no solamente recoge las disposiciones del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, sino también lo dispuesto en el artículo 8 de dicho Acuerdo el cual -tal y como lo dispone el artículo 8 de la Ley costarricense- determina que los Miembros podrán aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio.

Preguntas de seguimiento

A. Respecto a la cuestión del uso comercial desleal de los datos suministrados por un solicitante al organismo oficial competente dentro de los trámites de autorización de la comercialización de un producto farmacéutico o de un producto químico para la agricultura, sírvanse indicar de forma detallada si su ley prohíbe a un segundo solicitante basarse en los datos originales del primer solicitante o remitirse a ellos al presentar una solicitud posterior de autorización para comercializar un producto propio. ¿Exige el organismo oficial competente al

segundo solicitante la misma cantidad de datos que al primero? ¿Qué dispondrá al respecto el proyecto de nueva reglamentación? ¿Establecerá el proyecto de enmienda un plazo específico de protección de los datos de pruebas o de otro tipo no divulgados del primer solicitante?

Costa Rica no contaba con legislación especial sobre información no divulgada, por lo cual se promulgó la Ley N° 7975 del 4 de enero de 2000. En dicha Ley no se limita un período determinado para la protección a este tipo de secretos comerciales o industriales. La protección permanece en el tiempo siempre y cuando la información no divulgada cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 2 de dicha ley.

El artículo 2 de la Ley N° 7975 del 4 de enero de 2000 dispone en el párrafo 1 la protección a la información no divulgada, entendida ésta como aquella referente a los secretos comerciales e industriales que guarde, con carácter confidencial, una persona física o jurídica para impedir que información legítimamente bajo su control sea divulgada a terceros, adquirida o utilizada sin su consentimiento por terceros, de manera contraria a los usos comerciales honestos, siempre y cuando dicha información se ajuste a lo siguiente:

- Sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo ni en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas introducidas en los círculos donde normalmente se utiliza este tipo de información.
- Esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas razonables y proporcionales para mantenerla secreta.
- Tenga un valor comercial por su carácter de secreta.

Una de las innovaciones que se introdujeron a la legislación costarricense por medio de la Ley N° 7975 es la regulación en los casos en que se deban presentar datos de prueba u otros no divulgados ante instancias gubernamentales como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos; dichos datos se protegerán contra todo uso comercial desleal y toda divulgación, según lo dispone el artículo 8 de la Ley N° 7975 antes citada.

Es importante aclarar que actualmente las entidades competentes no están elaborando una reforma a la ley, sino más bien se está trabajando en la reglamentación necesaria de dicha legislación. Uno de los aspectos que serán abordados en la reglamentación respectiva es considerar con mayor detalle los alcances del artículo 8 de la citada Ley.

Por otra parte, es importante resaltar el artículo 9 de la mencionada Ley N° 7975 el cual hace referencia a la protección de la información no divulgada en procesos administrativos o judiciales. En este sentido, el artículo establece que en todo proceso, administrativo o judicial, en que alguna de las partes deba revelar información no divulgada, la autoridad que conozca del asunto deberá adoptar todas las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia.

En forma más específica, es necesario indicar que los medicamentos humanos los registra el Ministerio de Salud, mientras que los medicamentos veterinarios y agroquímicos los registra el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

En el caso en que se decida importar o comercializar patentes sobre medicamentos o agroquímicos, debe haber un registro previo ante el respectivo Ministerio. Para ello, se solicitan una serie de requisitos, entre ellos, las fórmulas (cuali-cuantitativas), sin embargo los funcionarios tienen prohibición para poder revelar dichas fórmulas durante el período en que se protege la patente, es

decir, 20 años. Esta prohibición deviene de las disposiciones de la Ley sobre Información no Divulgada, Ley N° 7975 del 4 de enero de 2000.

Tanto para la importación como para la comercialización de los productos, la información brindada por el primer registrante no es pública. En el caso en que un segundo registrante quiera comercializar o importar el producto deberá solicitar al Ministerio que verifique que las respectivas formulaciones son idénticas, no obstante en ningún caso los particulares tienen acceso a la información.

B. Sírvanse explicar en forma más detallada lo que su legislación considera "prácticas que limitan injustificadamente el comercio" (tal como se menciona en su respuesta).

Tal y como se explicó en la respuesta anterior, actualmente las entidades competentes no están elaborando una reforma a la Ley de Información no Divulgada, sino más bien se está trabajando en la reglamentación necesaria de dicha legislación. Uno de los aspectos que serán abordados en la reglamentación respectiva es considerar con mayor detalle los alcances del artículo 8 de la citada Ley.

Uno de los aspectos que deberán ser considerados en el proceso de reglamentación será el alcance de lo que se entiende por prácticas que limiten de manera injustificable el comercio, para lo cual, al menos, deberá hacerse remisión a las disposiciones de la Ley N° 7472 del 20 de diciembre de 1995, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Dicha Ley menciona en el artículo 1 que el objetivo de dicha Ley es proteger, efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de las regulaciones innecesarias para las actividades económicas.

D. OBSERVANCIA

7. Sírvanse indicar las disposiciones efectivas que tiene su legislación para disuadir la infracción de los derechos de propiedad intelectual.

La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual introduce importantes disposiciones para brindar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual mediante el establecimiento de medidas cautelares, medidas en frontera, procedimientos administrativos y procedimientos civiles y penales.

Los aspectos más relevantes de estas normas son los siguientes:

- Protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual por medio de una normativa necesaria en relación con medidas cautelares (incluso las aplicadas por las aduanas).
- Aplicabilidad de medidas cautelares por la autoridad administrativa o judicial siempre que quien la pida acredite que es el titular o su representante. La autoridad competente requerirá una garantía suficiente por el solicitante, para proteger al supuesto infractor y evitar abusos.
- Necesidad de otorgar audiencia sobre la aplicación de medidas cautelares, salvo si la misma puede hacer nugatorios sus efectos; sin embargo, cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin audiencia, la autoridad notificará la misma a la parte afectada al menos dentro de tres días hábiles después de la ejecución.

- Determinación para que la parte promovente presente la denuncia administrativa o la demanda judicial en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de la resolución que acoge la medida cautelar.
- Facultad para que el titular solicite a la autoridad administrativa o judicial que ordene a las autoridades de aduanas suspender una importación o exportación al momento de su despacho; sin embargo, se exigirá que acredite que es el titular o representante, que otorgue una garantía y aporte la información y descripción de la mercancía para que las autoridades de aduana puedan identificarla con facilidad.
- Obligación de las autoridades de aduana para que actúen de oficio y suspendan el despacho de mercancías si existe presunción de que infringen un derecho de propiedad intelectual. Las autoridades deberán denunciar al Ministerio Público la comisión del delito dentro de las 24 horas después de la retención de la mercancía.
- Facultad a las autoridades judiciales para que ordenen a las autoridades de aduana destruir o eliminar las mercancías infractoras.
- Protección a los perjudicados en casos de retención infundada de las mercancías.
- Establecimiento de un Tribunal Registral Administrativo que agotará la vía administrativa y conocerá en apelación las decisiones emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial y el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
- Disposición para que se conozca en vía abreviada los procedimientos civiles de propiedad intelectual.
- Imposición de penas de cárcel para delitos cometidos contra derechos de propiedad intelectual.

8. Sírvanse describir cualquier nueva iniciativa que sea planteada para mejorar la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

A pesar del poco tiempo de vigencia de la nueva Ley sobre Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Costa Rica ha logrado una serie de avances importantes y a la fecha se han presentado varios casos positivos de aplicación de la citada legislación, como por ejemplo los embargos practicados contra varias empresas dedicadas a la falsificación de marcas.

No obstante lo anterior, el Gobierno de Costa Rica está consciente que la promulgación de la Ley de Observancia N° 8039 es sólo el inicio de un proceso legislativo y educacional en procura de la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual. Por lo anterior, el Gobierno ha tenido la iniciativa de presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reformar la Ley N° 8039 que pretende el incremento de las penas privativas de libertad para los delitos contra derechos de propiedad intelectual; reformar la acción para los delitos contra derechos de autor para que sea de instancia pública y la derogación del artículo 70 de la Ley referente al principio de lesividad e insignificancia.
